

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

FACULTAD DE DERECHO



TRABAJO DE FIN DE GRADO

**MARCO NORMATIVO DE LAS UNIONES DE HECHO EN
EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL. BREVE
RESEÑA A LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.**

**STATUS OF DOMESTIC PARTNERSHIPS IN THE SPANISH
LEGAL SYSTEM. BRIEF COMMENT ON THE
JURISPRUDENCE OF THE CONSTITUTIONAL COURT.**

Por:

ÁLVARO SANTALLANA AGÜERO

Tutor:

JESÚS DANIEL AYLLÓN GARCÍA

Santander, 2020

RESUMEN: En el presente trabajo se trata de plasmar la situación actual en España en lo relativo a las uniones de hecho. Para ello se hará un análisis de los conceptos doctrinales y jurisprudenciales de la figura y un estudio de la evolución de las uniones no matrimoniales. Además, se analizarán las sentencias del Tribunal Constitucional que han apreciado la inconstitucionalidad de las leyes autonómicas de Madrid, Navarra y Valencia por vulneraciones de los artículos 149.1.8 y 10.1 de la Constitución.

PABRAS CLAVE: uniones de hecho, convivencia *more uxorio*, Tribunal Constitucional, libre desarrollo de la personalidad, comunidad autónoma, inconstitucionalidad, jurisprudencia, competencias estatales, competencias autonómicas.

ABSTRACT: The present essay tries to portray the current situation in Spain regarding de facto unions. For this it will be done an analysis of the doctrinal concepts and jurisprudence of the legal concept and a research of the constitutional court judgments that takes account the unconstitutionality of the Madrids, Navarras and Valencias autonomies laws for the infringement of the articles 149.1.8 and 10.1 of the Spanish constitution.

KEYWORD: domestics partnerships, cohabitation *more uxorio*, Constitutional Court, Free development of personality, autonomy, unconstitutionality, jurisprudence, state powers, autonomic powers.

ABREVIATURAS

BOCG: Boletín Oficial De Las Cortes Generales

CE: Constitución Española

LORAFNA: Ley Orgánica De Reintegración Y Amejoramiento Del Régimen Foral De Navarra

TC: Tribunal Constitucional

TS: Tribunal Supremo

STC: Sentencia Del Tribunal Constitucional

STS: Sentencia Del Tribunal Supremo

ÍNDICE

1. Introducción.....	7
2. Las uniones de hecho. concepto y definiciones.....	10
1. Concepto y definiciones doctrinales.....	10
2. Concepto y definiciones jurisprudenciales.....	12
3. Orígenes históricos. Antecedentes históricos de las uniones no matrimoniales desde la antigüedad hasta los tiempos contemporáneos.....	16
4. Situación normativa contemporánea en el marco del derecho español.....	20
1. Las uniones de hecho en el derecho común.....	22
2. La regulación nacional. Propositiones de Ley.....	28
5. Regulación autonómica. análisis de la normativa autonómica de parejas de hecho.....	34
1. Navarra	34
2. Islas baleares	37
3. Madrid	39
4. Asturias	41
5. Andalucía.....	43
6. Islas canarias	44
7. Extremadura	45
8. País vasco	47
9. Cantabria	49
10. Galicia	50
11. Cataluña	51

12.Aragón.....	53
13.Valencia	54
14.Murcia	55
15.La Rioja	56
16.Castila La Mancha	57
17.Castilla y León.....	57
 6. Análisis de las sentencias del tribunal constitucional que han declarado inconstitucionales las leyes de parejas de hecho de Madrid, Navarra y Valencia.....	 58
1. Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 81/2013.....	 58
2. Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 93/2013.....	 62
3. Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 110/2016.....	 68
7. CONCLUSIONES	72
 BIBLIOGRAFIA.....	 75
WEBGRAFÍA.....	76
NORMATIVA CONSULTADA.....	77
JURISPRUDENCIA CONSULTADA.....	79

1. INTRODUCCIÓN

Las uniones de hecho. Una realidad en una sociedad cambiante

La sociedad occidental en general, y la española en particular, ha venido sufriendo desde la segunda mitad del siglo XX una importante transformación, la cual se acrecienta en gran medida en España si tenemos en cuenta los importantes cambios sociopolíticos que hemos sufrido en nuestro país en los últimos cincuenta años de nuestra historia. Uno de los ámbitos en los que se hace más palpable este cambio del pensamiento colectivo es, sin duda alguna, la manera en la que entendemos el concepto de familia.

Cuando acudimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la primera acepción que recoge para la palabra familia es “*Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas*”, pero la familia es mucho más que eso. La familia es el primer conjunto de individuos del que todos los hombres seremos parte y su transcendencia en la formación de los individuos y en el desarrollo de su personalidad y la manera que estos tendrán de entender el mundo de que los rodea y la sociedad de la que forman parte tendrá una vital importancia.

Desde hace muchos siglos la sociedad occidental, construida sobre los cimientos del derecho romano y los valores éticos de la moral cristiana, había concebido que el núcleo de la familia estaba en el matrimonio. Sin embargo, y a consecuencia de los cambios experimentados en los últimos años, se empieza a concebir una simplificación formal de ciertas relaciones, como, en el caso que nos ocupa, la matrimonial. Así, en esta relativa simplificación, es como entrará en el tablero de juego en el que se construyen las familias, y por tanto las sociedades, una nueva figura que, siendo parecida al matrimonio, nada que ver tiene con este: las uniones de hecho.

En las páginas siguientes trataremos de hacer un acercamiento al significado de la unión de hecho, y ver como esta se integra en el derecho español.

Lo primero que debemos aclarar es a qué nos referimos cuando hablamos de uniones o parejas de hecho. En esta concreta institución su propia definición no es cuestión baladí, pues como a continuación veremos no existe una definición concreta y unívoca de la figura.

El problema nos viene dado ya desde el propio nombre de la institución, pues dependiendo del autor, o de la propia norma a la que acudamos podemos encontrar diferentes términos para designar una misma institución. GARCIA-HERVAS entiende que esto se debe a la novedosa juridificación de esta figura, pese a la antigüedad de esta. *El fenómeno de las uniones de hecho no es una realidad novedosa, pero sí lo es, sin embargo, la pretensión de presentarlas, social y jurídicamente, como situaciones equivalentes, análogas al matrimonio*¹. La misma autora también explica lo que supone este problema nominal: *“la misma pluralidad terminológica que las designa (...) puede ser interpretada como la expresión lingüística de la indefinición que encierra la realidad de las uniones de hecho. De ahí la dificultad a la hora de proponer un concepto unívoco”*².

Previamente a referenciar a algunos de los distintos autores que nos han brindado términos, conceptos y caracteres esenciales para el mejor entendimiento de tan conflictiva figura resulta necesario hacer un breve repaso por el contexto histórico actual, o por lo menos de los últimos años, y por las razones a las que se debe el auge de esta institución.

Como sucede con todos los cambios normativos que se dan en los ordenamientos jurídicos, estos tan solo son la plasmación jurídica de las realidades sociales de momentos concretos. En el caso de las uniones de hecho, uno de los motivos más importantes, aunque no el único, es la superación actual, y en estas últimas décadas, del concepto tradicional de familia de un modo general, y más concretamente del matrimonio canónico con esa suerte de pacto eterno y estanco entre los cónyuges, en favor de fórmulas más inmediatas y alejadas de ese halo religioso y perpetuo. Podríamos decir que los conceptos tradicionales sufren una ‘actualización’ para poder adaptarse a una sociedad en constante cambio como la actual.

Estas ‘actualizaciones’, subsiguientes de las crisis de los conceptos tradicionales, no surgen de la nada. En el caso de España tiene su origen más palpable en la década de los años setenta del siglo XX, con la Transición, la cual supone el abandono de un régimen dictatorial, la llegada de la democracia y la lucha por unos derechos y unas libertades que continua hasta nuestros días, y que tiene su más importante plasmación en la Constitución Española de 1978.

¹ GARCÍA-HERVAS, María Dolores. *Panorámica legislativa sobre las uniones de hecho. Ius Canonicum*, XLI, número 81, Página 320.

² GARCÍA-HERVAS, María Dolores. *Panorámica legislativa...* op. cit. Página 321.

Sería en los años posteriores a 1978, siguiendo el camino que es abierto por la Constitución, cuando el Estado iría dejando libertad a los ciudadanos para establecer nuevos modelos familiares más modernos e igualitarios. Esto se debió, entre otras cosas, a la legalización del divorcio no causal³, la equiparación legal entre hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales⁴, la salida del código penal del delito de adulterio⁵ o el surgimiento de leyes que ahora ya permitían la interrupción del embarazo⁶. Todo esto caló en la sociedad española de manera que propició una modernización transversal que afectó a todos los extractos y aspectos de la sociedad.

Resulta muy importante a la hora de entender el auge de esta figura conocer el hecho de que hasta el año 2005 no se legalizó en España el matrimonio homosexual⁷. Esto provocó que muchas parejas homosexuales tuviesen que acogerse a la figura de las uniones de hecho para poder brindarle algo más de seriedad y seguridad a su relación.

No es sino en este marco histórico-cultural español, generalmente llamado ‘La Democracia’ en el que se da el auge de una institución a la que cada vez deciden acogerse más parejas que no quieren contraer matrimonio, pero sí disfrutar de una situación similar⁸.

³ Sería la Ley 30/1981 de 7 de Julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. Esta ley todavía establecía ciertas barreras para acceder a la disolución del vínculo, ya que era necesaria la previa separación judicial y alegar causas tasadas en ley tanto para separarse como para divorciarse, además de exigirse un periodo mínimo de tiempo sin convivencia conyugal; barreras que fueron superadas con la entrada en vigor de la Ley 15/2005 que, definitiva, suprime el divorcio causal y el requisito previo a de la separación.

⁴ También en el año 1981, y por la ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico matrimonial.

⁵ Esta derogación vendría de la mano de la Ley 22/1978, de 22 de mayo, sobre la despenalización del adulterio y del amancebamiento. Con esta norma quedarían fuera del Código Penal de 1944 los artículos 449 y 452 y el último párrafo del artículo 453. De esta manera el adulterio dejaría de considerarse como un hecho punible, al igual que el amancebamiento. Por esta misma ley también quedaban derogados los artículos del Código Civil relativos a los efectos de estos delitos.

⁶ La primera norma que tuvimos en nuestro ordenamiento jurídico para la despenalización del aborto fue la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal. Por medio de esta se establecía un sistema mixto de plazos y supuestos, como la violación, las graves taras físicas o psíquicas del feto y el grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada. Aunque hubo intentos de introducir un nuevo supuesto de casos de conflicto personal, familiar o social para la mujer durante el gobierno de Felipe González, no sería hasta la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que se permitiría en España el aborto no causal.

⁷ La legalización del matrimonio homosexual vendría dada por parte de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.

⁸ En este sentido de situación similar pero no igual al matrimonio se ha referido la jurisprudencia en múltiples ocasiones. Sirva como ejemplo de ello las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1994 (ECLI: ES:TS:1994:4133 ID cendoj 28079110011994101773) y la de 12 de septiembre de 2005 (ECLI: ES:TS:2005:5270 ID cendoj 28079110012005100685), en las cuales dictamina el Tribunal que son similares, pero realidades diferentes y que por ello no pueden aplicarse a las uniones de hecho las normas del matrimonio.

2. LAS UNIONES DE HECHO. CONCEPTO Y DEFINICIONES

2.1 Concepto y definiciones doctrinales

A continuación, haremos un repaso de cómo han entendido, explicado y definido la figura distintos autores que conforman la doctrina española.

Es de justicia comenzar por LACRUZ BERDEJO, el reconocido civilista español fue uno de los primeros en realizar un acercamiento de la doctrina a la figura. Este autor relacionará íntimamente la unión de hecho con el matrimonio, estableciendo la imposibilidad de la equiparación entre ambas figuras. Este autor considera que la unión de hecho es aquella relación similar al matrimonio que cuente con los siguientes puntos: convivencia, estabilidad, disolución informal y libre y, finalmente, exclusividad de la relación o ausencia en los convivientes de otras situaciones o compromisos semejantes vigentes⁹.

Esta definición va a suponer el marco y la estela por la que se guiarán el resto de los autores, aunque algunos se aventurarán a sumar caracteres esenciales nuevos.

Otra definición importante por su autor, aunque un tanto vaga, es la que nos ofrece LASARTE, quien nos dice que técnicamente tendrán consideración de parejas de hecho todas las parejas que convivan cumpliendo todos los requisitos y presupuestos del matrimonio salvo los formales¹⁰.

En estas definiciones no se establece ninguna referencia a la orientación sexual de los compañeros, no sabemos si bien por una presunción de heterosexualidad o bien por carecer de importancia tal punto a los autores. Es caso es que hay autores que sí que han resaltado la necesidad de que la unión deba darse entre un hombre y una mujer. Este es el caso del profesor BERNARD MAINAR, quien, pese a no rechazar las uniones homosexuales, se opone a que tengan la misma consideración que la convivencia entre personas de distinto sexo. Él mismo dirá que

“la unión homosexual no presenta la misma extensión y reconocimiento que la heterosexual, presenta mayores dificultades o cuanto menos un análisis más profundo (...) por ser otra realidad distinta, más innovadora que, por su

⁹ LACRUZ BERDEJO, José Luis: elementos de derecho civil, IV. Derecho de Familia. 1997. Barcelona, pagina 410.

¹⁰ LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. Principios del derecho civil. Tomo IV. Derecho de Familia. Marcial Pons. 2015. Página 18.

estadio embrionario merece otra caracterización y tratamiento jurídico que el de las familias de hecho heterosexuales”¹¹.

Huelga decir la frontal oposición que ha sufrido esta postura por parte de la doctrina general de otros autores más modernos, como BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO¹² o MESA MARRERO¹³, que siguiendo el modelo de LACRUZ BERDEJO sí que hacen referencia la orientación sexual de los compañeros para dejar claro que esta, carece de importancia.

Así pues, desde un punto de vista doctrinal podríamos definir las uniones de hecho como: convivencia estable entre dos personas que, con independencia de su sexo, comparten un proyecto de vida común de manera análoga al matrimonio, pero sin formalidades en su constitución o cesación. Además de esta definición que ofrecemos para esta institución debemos explicar que, como ya adelantábamos antes, existen una serie de puntos que, como caracteres esenciales, debemos hallar en la unión para efectivamente considerar que nos encontramos ante una pareja de hecho. Estos requisitos son: la convivencia ‘*more uxorio*’, la estabilidad, la informalidad y la exclusividad.

La convivencia ‘*more uxorio*’ es quizás el más importante de los requisitos, y sin duda el más característico, ya que será indispensable para el propio fundamento de toda la figura. Los compañeros deberán convivir como si fuesen un matrimonio. Este ha venido siendo el rasgo indiscutible de la figura¹⁴

La estabilidad, responde a que la relación entre los compañeros debe ser sólida y con una proyección a futuro sin pretensiones de finalizarla o de no llevar a cabo un proyecto de vida conjunto. Esto supondrá que en algunos casos se llegue a exigir un determinado periodo de tiempo para entender por estable la unión¹⁵. Este será un requisito

¹¹ BERNARD MAINAR, Rafael. Uniones o matrimonios de hecho: nuevos intentos legislativos. Páginas 56 y ss. En proyecto social: revista de relaciones laborales, nº6, 1998.

¹² BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo. Manual de Derecho Civil. Derecho de Familia. Bercal. Madrid, 2018, páginas 44 y ss. Describe el autor, de un modo bastante similar a LACRUZ BERDEJO la unión de hecho, pero aclarando de manera expresa que la convivencia puede ser de personas del mismo o distinto sexo.

¹³ MESA MARRERO, Carolina. Aproximación histórica, terminológica y conceptual. Las uniones de hecho. análisis de las relaciones económicas y sus efectos. Aranzadi, Navarra, 1999, página 49. Esta autora volverá a hacer hincapié en el hecho de que la institución se dará “*con independencia de la sexualidad*”.

¹⁴ Este es un rasgo indudable y aceptado por la totalidad de la doctrina, ya que supone la piedra angular sobre la que se constituye la institución. Sin convivencia entre los miembros de la unión es imposible concebir la pareja de hecho. Sirva para esto de manera ejemplificativa toda la doctrina anteriormente mencionada en la que se entiende la convivencia en el mismo hogar como rasgo indiscutible.

¹⁵ LÓPEZ-MUÑIZ GOÑI, Miguel. Las uniones paramatrimoniales ante los procesos de familia. Guía práctica y jurisprudencia. 2ª Edición, Colex, 1997, pp. 30-33.

que encontrará una aceptación total por parte de la doctrina, sin embargo, aunque todos los autores entienden que debe darse, no será el mismo concepto el que tienen de la estabilidad. En este sentido, MESA MARRERO considerará que para entender acreditada dicha estabilidad deberá de imponerse un periodo mínimo que no sea lo suficientemente corto¹⁶, por otro lado, la doctrina de LACRUZ BERDEJO no será tan estricto en este sentido y considerará que puede entenderse la existencia de la unión, aunque esta sea de tan solo unos días, siempre y cuando el propósito de convivencia de ambos sea algo notorio.¹⁷

La informalidad será, junto con la convivencia '*more uxorio*' el otro punto característico de la figura. No se debe requerir de actos formales para la constitución o cesación de la unión. Precisamente es por ello por lo que se trata de uniones de hecho y no de derecho. Son situaciones que han de darse en la realidad, en la práctica, sin la necesidad de otros actos preliminares.¹⁸ Como veremos más adelante este requisito no siempre se cumple.

Y, por último, para terminar de analizar lo que es una pareja de hecho, debemos hablar de la exclusividad. El hecho de que la institución sea informal no significa que cualquiera pueda acceder a ella de cualquier manera, ya que será necesario que ninguno de los compañeros se halle en una situación de constante matrimonio ni en otra pareja de hecho. Imaginemos el sinsentido y la inseguridad jurídica que podría provocar el hecho de que una persona casada podría constituirse en pareja de hecho. Hay autores, como el exmagistrado del tribunal supremo XABIER O'CALLAGHAN que han identificado esta exclusividad más bien como una obligación de monogamia, como podría darse en el matrimonio¹⁹.

2.2 Concepto y definiciones jurisprudenciales

Hasta ahora hemos podido ver cómo la doctrina ha afrontado el problema de la conceptualización de un fenómeno tan complejo como el de las parejas de hecho, pero no

¹⁶ MESA MARRERO, Carolina. Aproximación histórica... op. cit. Páginas 38-42.

¹⁷ LACRUZ BERDEJO, José Luis. Elementos de derecho civil IV, Barcelona, 1997, página 410.

¹⁸ En este sentido se postulan ALBADALEJO en ALBADALEJO GARCÍA, Manuel. Curso de derecho civil. IV. Derecho de Familia. Edisofer. Madrid, 2013. Página 37. Al decirnos que no deberán precisar ninguna formalidad "*inicio, continuidad o cesación.*" O LASARTE en LASARTE ALVAREZ, Carlos. Principios... op. cit., página 18. De igual modo lo hará MESA MARRERO en MESA MARRERO, Carolina. Las uniones de hecho. Análisis de las relaciones económicas y sus efectos. Aranzadi. Navarra, 1999, página 49.

¹⁹ O'CALLAGHAN MUÑOZ, Xabier. Compendio de derecho civil. Derecho de familia. Editorial revista de derecho privado. Madrid, 1988, página 48.

debemos olvidar que el objetivo del derecho no es solo la observación de las conductas de los ciudadanos, sino la resolución de los problemas de estos mediante la aplicación de las normas. Entonces, con una figura con tantas vicisitudes y con un carácter tan informal como es el de las parejas de hecho debemos preguntarnos cómo la jurisprudencia ha lidiado con este problema y, sobre todo, tener en cuenta de que no ha tenido una referencia *ex lege* para la resolución de los problemas derivados de las uniones de hecho.

En este punto veremos algunas de las sentencias más relevantes sobre las uniones de hecho, en las que se ha tratado de buscar un concepto y de definir la figura, además de llevar a cabo resoluciones que marcarían una pauta para el desarrollo de la institución.

En cualquier análisis jurisprudencial que vayamos a realizar al respecto de las uniones de hecho resulta inevitable comenzar hablando de la sentencia del Tribunal supremo de 18 de mayo de 1992. Esta sentencia, si bien no es la primera que se pronuncia en torno a las parejas de hecho, sí que es la primera que nos brinda una definición que, aunque siendo meramente descriptiva, señala las líneas generales que se seguirán para comprender las “*uniones libres*” como las denomina la propia sentencia. Será en el fundamento jurídico cuarto en la que la sentencia dice lo siguiente:

“la convivencia “more uxorio” ha de desarrollarse en régimen vivencial de coexistencia diaria, estable, con permanencia temporal consolidada a lo largo de los años, practicada de forma externa y pública con acreditadas actuaciones conjuntas de los interesados, creándose así una comunal vida amplia, intereses y fines, en el núcleo de un mismo hogar”²⁰.

Como podemos comprobar la sentencia se expresa de un modo sumamente descriptivo, sirviendo esta definición como estela por la que se guiarán posteriores sentencias.

Si continuamos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo no pasaría mucho tiempo hasta encontrar una nueva e interesante sentencia al respecto. En este caso debemos detener nuestra atención en la STS de 22 de julio de 1993. En dicha sentencia el Alto Tribunal se pronuncia para aclararnos un controvertido tema: no se puede considerar a las uniones de hecho en el mismo nivel que al matrimonio.

²⁰ STS 18 de mayo de 1992. Fundamento jurídico cuarto. (ECLI: ES:TS:1992:3961 ID cendoj 28079110011992100979)

1º.- Que las uniones matrimoniales y las more uxorio no pueden ser consideradas a todos los efectos y consecuencias como supuestos o realidades equivalentes²¹

Ello supone, como explica el tribunal, que no cabrá el uso de la analogía entre ambas figuras, dado que deben considerarse como realidades diferenciadas.

2º.- Que como consecuencia de ello, no serán aplicables a esas uniones normas que sean específicamente establecidas para la regulación de las primeras, a menos que ello pudiera llevarse a efecto por el cauce de la analogía, a la que se refiere el motivo, por lo que se hace necesario contemplar dicha posibilidad.(...) Es evidente que esa semejanza no puede admitirse, desde el momento que el examen analógico- comparativo de las uniones de hecho y las matrimoniales nos ofrecen unas considerables diferencias; así, mientras las primeras son simplemente fácticas, están al margen del acto formal matrimonial, canónico o civil; las segundas no, lo que da lugar a que respecto de éstas últimas surjan una serie de derechos a la vez que muy diversas obligaciones, tal acontece por ejemplo con la creación del status iuris casado/da que tampoco es de aplicación a las uniones more uxorio, lo mismo acontece con los requisitos que la disolución de las matrimoniales requiere y no juegan para las de puro hecho²².

El tribunal defiende, como hemos podido ver, que en pos de la seguridad jurídica se hace necesario crear una marcada diferencia, en tanto en cuanto sea posible, de estas dos instituciones²³.

Otras sentencias, no ya del Tribunal Supremo, añadirían el requisito de la heterosexualidad de la pareja²⁴. No sería hasta la promulgación de las primeras leyes autonómicas de regulación de la materia con las que se podría por fin prescindir de tal requisito.

En definitiva, como hemos podido comprobar la jurisprudencia se ha pronunciado en modo bastante similar a como la doctrina ha ido configurando y definiendo a la propia

²¹ STS de 22 de julio de 1993. Fundamento jurídico cuarto. (ECLI: ES:TS:1993:5604 ID cendoj 28079110011993101580)

²² Ibidem

²³ En esta línea volvería pronunciarse el tribunal en sentencias posteriores, como las ya mencionadas de 27 de mayo de 1994 y de 12 de septiembre de 2005.

²⁴ En esta línea se pronunciaría la sentencia de 19 de octubre de 2002 de la Audiencia Provincial de Valencia. Aranzadi: JUR 2003/29459.

figura. Las similitudes no solo las podemos encontrar en la propia definición, sino que también los tribunales han utilizado de la más variada nomenclatura para referirse a la institución. Por ejemplo, encontramos nombres tales como: convivencia more uxorio²⁵, relación extramatrimonial²⁶ o unión estable de pareja²⁷, entre muchas otras.

²⁵ Sentencia Tribunal Constitucional 184/1990, de 15 de noviembre. Referencia ECLI: ES:TC:1990:184

²⁶ Auto del tribunal Constitucional 788/1987 de 24 de junio. Referencia ECLI:ES:TC:1987:788A

²⁷ Sentencia Tribunal Constitucional 93/2013, de 23 de abril. Referencia ECLI:ES:TC:2013:93

3. ORÍGENES HISTÓRICOS. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS UNIONES NO MATRIMONIALES DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA LOS TIEMPOS CONTEMPORÁNEOS.

Como ya habíamos adelantado en primer punto de este estudio sobre las uniones de hecho, esto no es un fenómeno reciente, sino que existen una enorme cantidad de ejemplos de este tipo de prácticas o de institución en la historia.

Es necesario aclarar antes de entrar a este repaso histórico que no es un análisis sobre las transformaciones de la institución de las uniones de hecho contemporáneas. Lo que vamos a hacer a continuación es un repaso histórico sobre el fenómeno de este tipo de relaciones, como mínimo similares a la del matrimonio a lo largo de la historia.

Las uniones de hecho han existido como una realidad fáctica en las sociedades desde tiempos inmemoriales. Su origen como uniones sexuales, que no requerían formalidades normadas por las comunidades para crearse, es incluso anterior a la existencia del matrimonio, si entendemos este como una forma de unión sometida a reglas más elaboradas.²⁸

Su origen como fenómeno de hecho es irrastreable y tan antiguo como la propia civilización, su realidad jurídica sí que es más fácilmente localizable. Encontramos un primer vestigio de este tipo de uniones en el ‘concubinato’, el cual ya se encontraba regulado por el código de Hammurabi²⁹. En este compendio de leyes con más de 4.000 años de antigüedad se entiende el concubinato como una unión inferior en categoría al matrimonio, pero socialmente aceptada y jurídicamente protegida, en tanto en cuanto cumpliese una serie de requisitos de índole reproductiva. Es de justicia mencionar a este respecto que en este primer acercamiento legal a la figura del concubinato se persiguen unos propósitos de carácter procreativos más que la unión en sí entre los compañeros.

Si continuamos hasta la Grecia del periodo clásico encontramos que el fenómeno persiste de un modo similar. En el modelo ateniense, por ejemplo, existía una fuerte tendencia al favorecimiento de la monogamia, sin embargo, era cosa aceptable que los

²⁸ VILLA GUARDIOLA, Vera Judith., & HURTADO PEÑA, Arturo. (2018). Las uniones de hecho o concubinatos en la historia mundial. *Advocatus*, 15(30). Página 84.

²⁹ El Código de Hammurabi recoge en su Ley 145: “*si un hombre ha tomado una esposa y ésta no le ha dado hijos y él se dispone a tomar una concubina, puede tomarla e introducirla en su casa. Pero no elevará a la concubina a la categoría de esposa.*”

hombres pudientes tuviesen en su propia casa una o más concubinas de manera permanente, con las que podían tener hijos y debían mantener. Estos hijos, aun siendo aceptados y reconocidos por el padre no tendrían nunca la consideración que se reservaba a los hijos legítimos fruto del matrimonio.³⁰ Otra cosa habitual, y ya más ‘cercana’ a lo que podríamos entender como uniones de hecho hoy en día se daba cuando existía algún impedimento para llevar a cabo el matrimonio. Por ejemplo, que, en las familias humildes, el padre no pudiera cubrir la dote de sus hijas, en tal caso las entregaban como concubinas³¹ al hombre para poder asegurar su estabilidad económica. Por poner un ejemplo famoso de imposibilidad del matrimonio podemos hablar del caso de Pericles y Aspasia de Mileto. En este caso el estratega ateniense tuvo que tomar a esta como concubina ya que no podían desposarse dado que ella no gozaba de la nacionalidad ateniense³².

Continuando con el derecho romano encontramos que no existía una realidad jurídica para el concubinato, pese a ser una práctica aceptada y común. *“el concubinato no fue definido institucionalmente, fue asumido como una convivencia sexual permanente de una pareja heterosexual que no se consideraba como legítima pues era considerado como una unión inferior que se encontraba eximida de las sanciones de ley Julia de Adulteriis por la cual se penaba a todo aquel que unido en matrimonio bajo la Iustae Nuptie, tuviera algún tipo de comercio carnal con la mujer fuera de su matrimonio, ya fuera joven o viuda”*³³.

Si avanzamos en el tiempo hasta la época medieval, y ya centrándonos más en el territorio ibérico, nos encontramos con la figura de la barraganía. En líneas generales la barraganía no dista mucho de lo que hemos visto que era el concubinato. Bajo este nombre es como se conocía al enlace o unión de un hombre soltero, ya fuese clérigo o no, con una mujer soltera, a la cual se conocía como barragana con el fin de diferenciarla de la mujer de bendiciones y de la mujer a yuras³⁴.

³⁰ ENTRENA KLETT, Carlos María. *Matrimonio, separación y divorcio en la Legislación actual y en la Historia*. (Aranzadi. Pamplona, 1982, página 96)

³¹ VILLA GUARDIOLA, Vera Judith., & HURTADO PEÑA, Arturo. (2018). *Op.cit.*, Página 95.

³² Loren J. SAMONS, Charles W. FORNARA. *Athens from Cleisthenes to Pericles*. 1991. Páginas 189 y ss

³³ VILLA GUARDIOLA, Vera Judith., & HURTADO PEÑA, Arturo. (2018). *Op.cit.*, Página 97.

³⁴ ESCRICHE, Joaquín. *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*. Madrid, 1847. Páginas 423 y 424.

Durante mucho tiempo esta figura fue recogida por textos legales y completamente habitual en la práctica, sin considerarse como algo indecoroso mantener este tipo de relaciones de manera pública y notoria. La barragana era considerada como una mujer legítima, aunque desigual y sin el goce de los derechos propios del matrimonio³⁵.

Las reglas para este tipo de enlaces las podemos encontrar reguladas en Las Partidas de ALFONSO X el Sabio. En la Partida Cuarta se establece el régimen jurídico general para las barraganas y para sus hijos. Así por ejemplo se establece que *todo hombre que no fuese impedido por razón de casamiento u orden es libre de tomar barragana*³⁶. Esta solo podría ser una, con la que no existiese consanguinidad ni parentesco hasta el cuarto grado, ni tampoco podría ser menor de los doce años.

En la mayoría de los casos no estaba permitido que los hijos fruto de este tipo de uniones, conocidos como hijos de ganancia, gozasen de derechos sucesorios. Sin embargo, esta medida, como la regulación en otros aspectos de la barraganía, fue recogida de una manera más laxa en los fueros, llegando a reconocer derechos sucesorios a los hijos y ciertos derechos civiles a las mujeres. El hecho de que en los fueros la institución fuese tomada de manera más permisiva puede deberse a la necesidad que existía en ese momento de fomentar la natalidad y el aumento poblacional en los territorios de frontera, ya que no debemos olvidar que nos encontramos en el periodo histórico de la Reconquista.

La barraganía se dio en España hasta el siglo XVI, ya que en el Concilio de Trento del año 1562 se proscribió cualquier tipo de relación concubinaria bajo penas de excomunión o incluso de destierro, ya que a partir de este momento se las empezó a considerar este tipo de prácticas como graves pecados.

Otro tipo de unión muy común que se da durante el matrimonio y que ya hemos mencionado anteriormente es el matrimonio a yuras. Este tipo de unión no era ningún modo de concubinato, sino una relación matrimonial que se celebraba sin oficio ni mayor formalidad, sino tan solo mediante la promesa de los cónyuges, los cuales comenzaba a convivir bajo las mismas obligaciones y características que el matrimonio celebrado con todas las solemnidades. Este tipo de enlace era lícito, pero se llevaba a cabo de manera

³⁵ Ibidem.

³⁶ Las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio. Partida IV, Título XIV, Ley II. Página 92.

clandestina. Realmente lo único que lo diferenciaba del matrimonio canónico era la solemnidad y la publicidad³⁷.

A partir de este momento en España no volverá a considerarse legal ningún tipo de enlace extramatrimonial y se considerará que el núcleo para la creación de cualquier familia deberá pasar necesariamente por la unión matrimonial. Tan solo existirá la excepción durante la breve Segunda República en la que se permitirán las uniones extramatrimoniales, aunque con una baja, o incluso nula, aceptación social.

Huelga decir que durante la época del Franquismo no era aceptado, ni legal, ni socialmente cualquier tipo de enlace que escapase del matrimonio, es por ello que no volveremos a encontrar ningún tipo de figura similar a las uniones de hecho o al concubinato hasta la llegada de la democracia a España durante la Transición.

³⁷ Esta institución del matrimonio a yuras guarda grandes paralelismos con algunas figuras, contempladas aún a día de hoy en el *Common Law*. Según el glosario de la Embajada estadounidense, el término *common law marriage*, también conocido como *matrimonio de derecho consuetudinario*, se aplica cuando hay un acuerdo entre un hombre y una mujer para “entrar en matrimonio” sin haber registrado su unión ante una ceremonia civil o religiosa. En Escocia se le conocerá como *marriage by cohabitation with habit and repute* y en otros países como Israel o Canadá se les conoce como *common law-partners*.

4. SITUACIÓN NORMATIVA CONTEMPORÁNEA EN EL MARCO DEL DERECHO ESPAÑOL

Como hemos podido comprobar, las uniones de hecho son una realidad compleja y con muchos matices desde la antigüedad, y esta complejidad pervive hasta nuestros días. Hoy en día el mayor problema no estriba en su aceptación o no, ya que tanto el legislador como la jurisprudencia han demostrado hacerse eco de esta realidad y no ser ajenos a ella, sino que el problema latente es la dispersión normativa con respecto a la materia. Por un lado, tenemos el problema de que no existe una ley común que regule la materia a nivel nacional, sino que han sido las propias autonomías las que han ido legislando y creando sus propias regulaciones al respecto. Esto ha provocado una suerte de ‘reino de taifas’ en la que cada Comunidad Autónoma tiene sus propias reglas para considerar lo que es o no una pareja de hecho. A continuación, haremos una referencia a las leyes autonómicas que regulan las parejas de hecho.

A día de hoy son 14 las autonomías que han creado su propia ley reguladora, y son las siguientes:

- Navarra: Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de parejas estables y Título VII, del Libro I (leyes 106 a 113) de Ley 1/1973 de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra
-
- Islas Baleares: Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables.
- Madrid: Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid.
- Asturias: Ley 4/2002, de 23 de mayo, de parejas estables.
- Andalucía: Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de parejas de hecho.
- Islas Canarias: Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Extremadura: Ley 5/2003, de 20 de marzo de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- País Vasco: Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.
- Cantabria: Ley 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho de la Comunidad de Cantabria.

- Galicia: Disposición Adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio de derecho civil de Galicia, y Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, por el que se crea y se regula el Registro de Parejas de Hecho de Galicia.
- Cataluña: artículos 234.1 a 234.14 del Código Civil catalán. Libro segundo, Capítulo cuarto del Título tercero del Código Civil de Cataluña.
- Aragón: artículos 303 a 315 del Código Civil Aragonés.
- Comunidad Valenciana: Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la Comunidad Valenciana.
- Región de Murcia: Ley 7/2018, de 3 de julio, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En el resto de las comunidades, pese a no crear su propia ley autonómica reguladora de las parejas de hecho, sí que han legislado de un modo u otro sobre la materia, optando simplemente por un sistema de registro de parejas de hecho. Este es caso de La Rioja, mediante Decreto 30/2010, de 14 de mayo, por el que se crea el Registro de Parejas de Hecho de La Rioja, modificado por el Decreto 10/2013, de 15 de marzo; Castilla la Mancha mediante el decreto 139/2012, de 25 de octubre y Castilla y León mediante el Decreto 117/2002, de 24 de octubre.

En el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla existen sendos reglamentos reguladores del registro de parejas de hecho, de 1997 y 2008 respectivamente.

Como es apreciable, todas estas normas son muy recientes, dado que la primera en ser promulgada fue la Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja en Cataluña, hoy en día ya derogada, y la más antigua de las que siguen vigentes es del año 2000. A pesar de ello, dentro del derecho común existían una serie de normas que referenciaban tal institución de manera más o menos clara. Esto era una muestra de que el legislador nacional era conocedor de la realidad social que concernía a las parejas de hecho y las tuvo en cuenta a la hora de redactar las normas que podían afectarlas.

4.1 las uniones de hecho en el derecho común.

Ahora veremos cómo estas uniones han ido abriéndose un hueco dentro de las distintas ramas de nuestro ordenamiento.

La primera norma a la que debemos acudir a la hora de hablar del reconocimiento o no en nuestro ordenamiento jurídico, ya sea de las parejas de hecho como en el caso concreto o de cualquier otra institución que queramos analizar, es a la Constitución. En nuestra Carta Magna no vamos a encontrar ninguna referencia directa a las uniones *more uxorio*³⁸, ni en sentido positivo ni en sentido negativo, sin embargo, sí que vamos a encontrar un artículo importante como es el artículo 39, que reza lo siguiente:

Artículo 39.

- 1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.*
- 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.*
- 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.*
- 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.*

Aquí encontramos una cuestión muy importante para el tema que nos ocupa que es la protección de la familia independientemente de que esta tenga un origen en el matrimonio o no, además de que también asegura la protección de los hijos ya sean estos nacidos dentro o fuera de su matrimonio y al margen de su filiación. Si bien no podemos entender que en este artículo se esté haciendo referencia directa a las uniones de hecho, sí que sirve como una importante piedra angular sobre la que fundamenta la existencia de

³⁸ Si bien es verdad que la Constitución no hace mención a las uniones de hecho es interesante mencionar que el anteproyecto de la CE se establecía lo siguiente en el artículo 27.1: "A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen el derecho a contraer matrimonio y a crear y mantener en igualdad de derechos, relaciones estables de familia." Este precepto fue finalmente eliminado y por ello no hay ninguna referencia directa a las uniones de hecho.

estas, pues ya se muestra que el legislador no es desconocedor de la realidad social en la que no todas las familias tienen un origen matrimonial.³⁹

Si bajamos de rango y acudimos a una de las leyes orgánicas más importantes nos encontramos con la Ley Orgánica del Poder Judicial llega a dar una gran importancia al hecho de que dos personas puedan estar unidas en pareja de hecho, es por ello que artículos como el 219.1, 219.2 y 219.15 establecen como motivo de abstención o recusación el “*vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable*” como el representante del Ministerio Fiscal, las partes, letrados y procuradores o jueces o magistrados que intervengan en el pleito. La misma norma nos indica en su artículo 391 la imposibilidad de que dos magistrados “*unidos por vínculo matrimonial o situación de hecho equivalente*” puedan pertenecer a una misma Sala de Justicia, Audiencia Provincial o Sala de Gobierno de Jueces.

Continuando por las leyes orgánicas encontramos que las referencias en el código penal se hacen de otra manera e incluso llega a ser discutible que se refieran (o que solo se refieran) a las uniones de hecho. El código penal, a lo largo de los distintos artículos hace una equiparación entre los cónyuges y “la persona ligada en análoga relación de afectividad” sin establecer el requisito de la convivencia e incluso diciendo de manera expresa que tal convivencia no es necesaria⁴⁰. Esto pone de manifiesto, a nuestro entender, que el legislador no estaba pensando tanto en la pareja de hecho *per se*, sino en la relación de afectividad que puede surgir de un noviazgo, sin la necesidad de que surja una pareja de hecho o un matrimonio.

Si acudimos al derecho penitenciario, en la Ley Orgánica General Penitenciaria, encontramos varios artículos que mencionan a la persona “*íntimamente vinculada*” con el reo, sin hacer mayores precisiones. Esto sucede en los artículos 47 y 52 de la ley. En el artículo 52 se establece que el reo tendrá el derecho a conocer del fallecimiento o la grave enfermedad de tal persona. En el artículo 47 se establece lo siguiente:

³⁹ Esta apreciación ya sería hecha por la jurisprudencia en la ya mencionada sentencia del 18 de mayo de 1992 del Tribunal Supremo, la cual en su fundamento jurídico tercero nos dice lo siguiente: “(...) *La Constitución no las prevé, pero tampoco expresamente las interdicta o rechaza y así se desprende de la lectura de su artículo 32 en relación con el 39, que se proyecta a la protección de la familia en forma genérica, es decir como núcleo creado tanto por el matrimonio como por la pareja de hecho.*”

⁴⁰ Encontraremos múltiples ejemplos de esto, a modo de ejemplo podemos destacar los artículos 148 y 153 en relación con delito de lesiones, los artículos 171.4, en relación a las amenazas dentro de las relaciones de pareja, los artículos 172 y 173 en relación a las coacciones o el artículo 197 en relación a la revelación de secretos.

En caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas con los internos, alumbramiento de la esposa, así como por importantes y comprobados motivos, con las medidas de seguridad adecuadas, se concederán permisos de salida, salvo que concurran circunstancias excepcionales.

El hecho de que no se especifique con la suficiente claridad qué se debe entender por persona íntimamente vinculada abre la posibilidad a que se entienda dentro de estas más personas aparte de la pareja del reo. Además, parece haber una imprecisión del legislador a la hora de redactar el artículo, ya que cuando se refiere al alumbramiento solo menciona a la esposa. Esto resulta llamativo ya que desatiende el verdadero objetivo que tiene el permiso de salida en este caso, que es que el reo pueda acudir al nacimiento de su hijo, independientemente de que este sea fruto de matrimonio o no.

Si nos movemos hacia la Ley de Enjuiciamiento Civil nos encontramos que en su artículo 124.3 establece que las mismas causas de recusación recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial serán motivo de recusación de peritos. Si continuamos avanzando hasta el artículo 377.1 se indica que será motivo de tacha de testigos que se encuentren en situación análoga al matrimonio de la parte que lo haya presentado, abogado o procurador.

Por su parte, la Ley de Enjuiciamiento Criminal también tiene en cuenta tal circunstancia haciendo gala de ello a la hora de recoger las mismas dispensas de obligaciones o concediendo los mismos derechos que al cónyuge o a otros familiares. Para ello no siempre se refiere a la pareja de hecho en los mismos términos, ya que en algunos casos se referirá de la misma manera que hace el Código Penal, pero dejando claro de manera expresa que será necesaria la convivencia y en otras se referirá a quien haya convivido con el penado como cónyuge.

Si entramos dentro del ámbito del derecho civil, social y laboral vamos a encontrar las más importantes y abundantes referencias a las parejas de hecho. No es necesario buscar mucho para encontrar las primeras en el Código Civil. En el artículo 101 ya se establece que el derecho a pensión compensatoria se verá extinguido cuando el acreedor contraiga nuevo matrimonio o conviva maritalmente con otra persona. Otra referencia la podemos encontrar en el artículo 320, que, en relación con la emancipación de menores de edad, los que sean mayores de dieciséis años podrán solicitarla al juez cuando quien ejerza la patria potestad conviva maritalmente con persona distinta del otro progenitor. El

artículo 831.5 también se refiere a las uniones de hecho en términos similares al 101, al conferir determinadas facultades de realizar mejoras a los cónyuges supervivientes en tanto en cuanto el testador así lo dispusiese en el testamento. En el momento en el que el cónyuge pase a formar parte de una relación de hecho análoga al matrimonio estas facultades cesarán, señala el código. El artículo 831.6 establece que lo dispuesto en los anteriores apartados será de aplicación a la pareja viuda si hay descendencia en común, pese a que no estén casados.

Saliendo del código civil encontramos una importante referencia para el derecho de familia, ya que en la disposición adicional 3ª de la ley 21/1987 se establece una equiparación en materia de adopción entre los cónyuges y los convivientes de hecho en tanto en cuanto establece que: *“Las referencias de esta ley a la capacidad de los cónyuges para adoptar simultáneamente a un menor será también al hombre y la mujer integrantes de una pareja unida de forma permanente por relación de afectividad análoga a la conyugal”*.

Es de obligada mención al hablar de las referencias a las uniones de hecho en la legislación civil el artículo 16.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, de 24 de noviembre. En dicho artículo se establece un orden de prelación para la subrogación en el contrato de arrendamiento en el caso del fallecimiento del arrendatario. En primer lugar, encontramos al cónyuge superviviente que al momento del fallecimiento conviviese con el arrendatario. En segundo lugar, el artículo 16.1.b) se establece lo siguiente:

“la persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante, al menos los dos años anteriores al tiempo del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastaría la mera convivencia.”

Esta referencia en la LAU es realmente importante, ya que no solo supone una equiparación casi total entre parejas de hecho y matrimonio, sino que además es sumamente avanzada a su tiempo ya que realiza la primera dotación de efectos jurídicos a las parejas homosexuales en igualdad de condiciones con las heterosexuales. En relación con la igualdad entre matrimonio y uniones *more uxorio* podemos ver como los defectos jurídicos son casi idénticos, tan solo por la diferencia de en caso de las segundas se exige la convivencia durante los dos años anteriores, en tanto en cuanto no exista descendencia común, ya que de haberla bastaría con la mera convivencia al momento del fallecimiento,

al igual que en el caso del matrimonio. En realidad, esta exigencia tiene sentido si tenemos en cuenta que se debe a la necesidad que existe de probar de algún modo la estabilidad y permanencia de la pareja de hecho. Sin embargo, esto podría suponer una desvirtualización de la figura.

Resulta relevante la mención que encontramos en el artículo 36 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de daños y perjuicios en accidentes de circulación. En su segundo apartado se establece lo siguiente:

“A los efectos de esta Ley, se considera que sufre el mismo perjuicio resarcible que el cónyuge viudo el miembro superviviente de una pareja de hecho estable constituida mediante inscripción en un registro o documento público o que haya convivido un mínimo de un año inmediatamente anterior al fallecimiento o un período inferior si tiene un hijo en común.”

En este artículo la ley establece que se deberá considerar de igual manera a la pareja de hecho que al cónyuge viudo. Sin embargo, unos plazos mínimos de convivencia; de un año en caso de no existir descendencia y ‘*un periodo inferior*’ no determinado en caso de haberla.

En el artículo 60 de la misma ley también se dispone que se entenderá como familia a la pareja de hecho. El artículo 63 establece en las reglas de valoración que los años de convivencia como pareja de hecho se sumarán a los de matrimonio en caso de que los compañeros contraigan matrimonio.

Por último, cuando entramos a ver las distintas referencias que se hacen dentro del derecho común a las parejas de hecho no podemos dejar de mencionar a la que quizá sea la más importante y completa de todas, la cual la encontramos en los artículos 218 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social. En estos artículos se va a reconocer y regular el auxilio por defunción y la pensión de viudedad para la pareja de hecho superviviente.

En el artículo 218 de la ley se reconocerá que tiene derecho la pareja de hecho a recibir de manera inmediata un auxilio por defunción para hacer frente a los gastos derivados del sepelio. De hecho, existe una presunción de que los gastos habrán sido sufragados por la pareja de hecho incluso por delante de los hijos.

El artículo 220 indica cuáles serán los casos en los que se podrá recibir pensión de viudedad cuando el causante se encontrase en situación de nulidad matrimonial,

divorcio o separación. En este caso sucede algo similar a lo que hemos visto que sucedía en el Código Civil con las pensiones compensatorias, y es que, en los casos de divorcio, si la persona que hubiera sido cónyuge del causante se establece en pareja de hecho perderá el derecho a la pensión de viudedad, lo mismo sucede en los casos de nulidad matrimonial.

En el artículo 221 se regula la pensión de viudedad para la pareja de hecho sobreviviente, sin embargo, no lo hace en los mismos términos que la pensión del cónyuge, sino que para poder percibir esta será necesario que se demuestren unos ciertos ingresos. Además, la pensión podrá incrementarse en función de la existencia o no de hijos en común si conviven con el sobreviviente y siempre y cuando tengan derecho a pensión de orfandad. Aún con todo lo anterior, lo que más debe llamarnos la atención de este artículo es que ofrece su propia definición de pareja de hecho:

A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años.

La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

Dos cosas resultan llamativas de lo que establece el artículo 221.2. En primer lugar, la duración de cinco años para que ser considerado como pareja de hecho, tiempo que parece bastante extenso si tenemos en cuenta que es más del doble de lo que exige la LAU. En segundo lugar, la certificación de la existencia de la pareja de hecho por medio de registros o documentos públicos. Si bien esta parece una medida lógica y completamente entendible, pues es un modo no especialmente gravoso para evitar fraudes a la Seguridad Social, considero que en cierto modo entra en conflicto con la propia definición de la figura. Debemos recordar que las uniones de hecho son de hecho, no de derecho. Es una situación que se da de facto y que sin la necesidad de actos formales

podría llegar a producir efectos jurídicos. Considero pues que el hecho de requerir actos como documentos públicos que atestigüen la pareja de hecho atenta directamente contra la propia figura, además de poder llegar a crear un conflicto en el caso de que exista otra pareja de hecho que no disponga de tales inscripciones en registros o en documentos públicos.

4.2 La regulación nacional. Propositiones de ley.

Como ya hemos visto las uniones de hecho se encuentran diseminadas por todo nuestro ordenamiento jurídico, es por ello que ahora es necesario que hablemos de los distintos intentos que ha tenido el legislador nacional de unificar la figura en una sola ley que sea de aplicación sobre todo el territorio nacional, por ello, a continuación procederemos a analizar los aspectos más significantes de las distintas proposiciones de ley que se han llevado al Congreso de los Diputados, aunque debemos adelantar, que como por otra parte resulta evidente, ninguna de estas proposiciones ha llegado a un fin satisfactorio y que ninguna ha podido materializarse.

Proposición de Ley 122/000046, por la que se reconocen determinados efectos jurídicos a las uniones de hecho. Grupo Parlamentario Socialista. ⁴¹⁴²

La primera de las proposiciones planteadas en el congreso de los diputados a propuesta del grupo parlamentario socialista.

Su exposición de motivos trata de justificar la existencia de sí misma en que, por mucho que la convivencia more uxorio sea una cuestión de hecho no puede escapar del derecho. Para ello se escuda en la Resolución de 7 de mayo de 1998, de contratos y pactos matrimoniales entre personas que conviven de hecho. además, considera que, en defensa de los artículos diez y treinta y nueve de la constitucion, es necesario que la institución quede protegida por un texto legal.

⁴¹ BOCG, N.º -61-1. 8 de noviembre de 1996.

⁴² Esta proposición de ley se volvería a presentar en dos ocasiones más con leves modificaciones. Proposición de Ley 122/000068, por la que se reconocen determinados efectos jurídicos a las parejas de hecho. BOCG, -Nº 87-1, 10 de abril de 1997 y Proposición de Ley 122/000023, por la que se reconocen determinados efectos jurídicos a las parejas de hecho. BOCG, Nº 27-1, 25 de abril de 2000. Además, es digno de mención de que el grupo parlamentario coalición canaria presento un proyecto de ley en idénticos términos a este: Proposición de Ley 122/000071, de Reconocimiento de efectos jurídicos a las parejas de hecho estables y de modificación de determinados aspectos del Código Civil, Estatuto de los Trabajadores, Ley General de la Seguridad Social, Medidas para la Reforma de la Función Pública, Clases Pasivas del Estado y de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Presentada por el Grupo Parlamentario Coalición Canaria. BOCG, N.º 90-1, 14 de abril de 1997.

En su artículo primero se hace la siguiente definición de la unión de hecho:

“Quienes convivan en pareja de forma libre, pública y notoria, en una relación de afectividad similar a la conyugal, independientemente de su orientación sexual, mayores de edad o menores emancipados, sin vínculos de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad, ligado de forma estable al menos durante dos años, salvo que tuvieran descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia. Ninguno de los convivientes podrá estar unido por un vínculo matrimonial en vigor, salvo en los supuestos en que la ruptura de dicho vínculo sea imposible por causas ajenas a su voluntad”.

Lo que más nos debe de llamar la atención de que esta norma ya tendría en cuenta la posibilidad de que la unión pudiese estar formada por personas del mismo sexo. Esto tampoco debe resultarnos especialmente extraño si tenemos en cuenta que uno de los motivos más importantes por las que se da el auge de la figura de las parejas de hecho es por la imposibilidad de que personas del mismo sexo pudiesen contraer matrimonio.

Por otro lado, es llamativo también la precaución del legislador a la hora de saber que se debe considerar pareja de hecho y establecer el mínimo temporal de dos años de convivencia, salvo la existencia de descendencia común, en cuyo caso ya se estaría probando la pretensión de permanencia de la pareja.

El artículo segundo de la ley dispondría que para que la unión de hecho pueda ser tenida en cuenta deberá de estar inscrita en los registros, creados al efecto por las comunidades autónomas o por los ayuntamientos. Esto nos dejaría un panorama registral prácticamente idéntico al que podemos encontrar ahora mismo y que tampoco bastaría para la solución del problema de la seguridad jurídica, ya que los registros no dispondrían de una conexión entre ellos al depender de Administraciones distintas, lo cual seguía suponiendo un problema de dispersión, exactamente igual que ahora.

La proposición de ley continúa exponiendo las modificaciones legales que supondría la creación de esta ley. La mayoría de estas van a tratar de equiparar la posición de los miembros de la unión de hecho a la de los cónyuges. Así, por ejemplo, el Código Civil se modificaría en este sentido en la obligación de prestación de alimentos, en materia sucesoria se una equiparación en relación con la sucesión intestada.

El Estatuto de los Trabajadores se modificaría modificado para entender al compañero de la pareja de hecho dentro de los familiares convivientes que no se

considerarán trabajadores. También se modifica el artículo 40.3 del estatuto para la equiparación del compañero en casos de traslados.

De un modo similar se vería modificada la Ley General de la Seguridad Social para la consideración del conviviente como trabajador. La misma ley también equipararía al compañero al cónyuge en los casos de auxilio por defunción y a la hora de recibir la pensión de viudedad y en la asistencia sanitaria.

En cuanto a las modificaciones de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública y de la Ley de Clases Pasivas del Estado que se harían serían en seguimiento de las mismas medidas ya comentadas.

Por último, hay que mencionar que se modificaría también la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones para equiparar al compañero con el cónyuge.

*Proposición de Ley 122/000049, de medidas para la igualdad jurídica para las parejas de hecho. Grupo Parlamentario Izquierda Unida e Iniciativa por Cataluña.*⁴³⁴⁴

De contenido muy similar a la anterior proposición de ley, y justificada en su exposición de motivos de manera casi idéntica, buscando el interés de proteger a la familia y consagrar los principios de igualdad y libertad de desarrollo de la personalidad.

En este sentido, de protección del derecho de no discriminación es llamativo que el primer artículo de la ley⁴⁵ establezca, de manera profundamente naif, la declaración de nulidad de todas las normas que contravengan dicho principio. Esto supondría, de manera bastante ingenua, la nulidad de leyes superiores en rango a esta ley ordinaria.

En cuanto a la definición de la unión de hecho propuesta, se hace una idéntica en casi todos sus extremos a la de la anterior propuesta de ley vista, salvo por el hecho de que el recelo del legislador es algo menor al disponer un periodo mínimo de convivencia de tan solo un año. Además, establecerá el mismo sistema de registros autonómicos o locales que en la anterior proposición.

⁴³ BOCG, N° 64-1, 15 de noviembre de 1996.

⁴⁴ Este mismo texto se presentaría hasta en tres ocasiones más con mínimas modificaciones. Estas proposiciones fueron: la 122/000069, de Igualdad Jurídica de las Parejas de Hecho (BOCG 10 de abril de 1997); la 122/000028, de Medidas para la Igualdad Jurídica de las Parejas de Hecho (BOCG 8 de mayo de 2000); y la 122/000048, de Igualdad Jurídica de las Parejas de Hecho (BOCG 29 de mayo de 2000).

⁴⁵ “Nadie puede ser discriminado por razón del grupo familiar del que forme parte, tenga éste su origen en la filiación, en el matrimonio o en la unión de dos personas que convivan por análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual. Se entiende nula, y sin efecto, cualquier norma legal o convencional que vulnere o contradiga este principio.”

Las similitudes con la anterior proposición continua también en las modificaciones legislativas que se proponen, es por ello por lo que aquí solo comentaremos aquellos aspectos en los que esta proposición va un poco más allá en sus cambios.

En lo relativo al derecho civil se modificarían los supuestos para la obtención de la vecindad civil, por lo que ahora el compañero de la unión de hecho se encontraría en la misma posición que el cónyuge a este respecto. También se daría esta equiparación para la obtención de la nacionalidad del cónyuge extranjero en el plazo de un año o sea viudo de español. También se da equiparación con los cónyuges en la presunción de paternidad, en la declaración de ausencia y representación de ausente, declaración de capacidad y prodigalidad y en otros aspectos relativos al derecho sucesorio.

En las modificaciones del estatuto de los trabajadores, la única diferencia con respecto a la anterior proposición reside en que se incluye una suerte de permiso matrimonial de quince días a aquellas parejas que acrediten el año de convivencia.

En cuanto a las modificaciones de las normas tributarias se centrarán también en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, incluyendo ahora una presunción de transmisión lucrativa entre los miembros de la pareja. Además de equiparar también al compañero a los cónyuges en las transmisiones por causa de muerte del artículo trece. En el caso de los aplazamientos se incluirá al conviviente en las liquidaciones giradas a consecuencia de la transmisión de la vivienda habitual.

Por último, en la materia tributaria, se incluye dentro de la unidad familiar de la ley del IRPF a la unión de hecho y sus descendientes.

Proposición de Ley 122/000098, Orgánica de contrato de unión civil. Grupo Parlamentario Popular. ⁴⁶

Sin duda la más ambiciosa y completa de las proposiciones de ley que se han hecho sobre la materia. Esto se debe a que esta no trata de ser una ley ordinaria, sino una ley orgánica, dado que tiene pretensiones a la modificación de leyes orgánicas como el código penal o la ley orgánica del poder judicial y la ley de Habeas Corpus.

⁴⁶ BOCG, N.º 117-1, de 29 de septiembre de 1997.

Lo primero que debe llamarnos la atención de esta proposición de ley es que no se refiere al fenómeno como una unión de hecho, sino que adopta una visión más contractualista y trata de desarrollar una relación creada a raíz de la suscripción de un contrato de unión civil.

Es interesante en este caso acudir al primero de los artículos en el que se define la unión de hecho de un modo un tanto particular, ya que no va a centrarse tanto en el hecho de la convivencia sino en el mismo contrato. Determinando las prohibiciones para su suscripción y los extremos que este debe contener, además es llamativo como en este caso se otorga competencias al juez encargado del registro para la inscripción del contrato y al juez de primera instancia del lugar de domicilio del demandado para la solución de las demandas derivadas de este:

“Artículo 1:

1. Por el contrato de unión civil dos personas físicas mayores de edad acuerdan convivir y prestarse ayuda mutua.

2. No podrá ser parte de un contrato de unión civil quien lo fuese de otro vigente o estuviese casado. No podrá otorgarse bajo término o condición.

3. El contrato de unión civil se otorgará ante notario y deberá inscribirse en el Registro Civil correspondiente a cada uno de los contratantes.

4. El régimen económico de estas uniones será dispuesto expresamente en el contrato de entre las modalidades establecidas en el Código Civil.

5. Las partes del contrato de unión civil podrán establecer en el mismo efecto sucesorios.

6. El contrato de unión civil quedará resuelto por matrimonio de una de las partes o a instancia de cualquiera de ellas, efectuada ante el juez encargado del Registro Civil ante el que se efectuó la inscripción. La resolución será comunicada por dicho encargado al Registro Civil de la otra parte y a ésta misma. El contrato de unión civil no producirá en ningún caso efectos antes de transcurrido un año desde su formalización.

7. En caso de demanda referida a derechos derivados del contrato de unión civil será competente el Juez de 1.ª instancia del domicilio del demandado,

por los trámites del juicio que corresponda por razón de la cuantía y, si ésta fuera inestimable, por el de menor cuantía.”

Resulta muy importante el cambio que intenta crear esta proposición de ley con respecto al plano registral. Como se puede ver en el artículo primero, la inscripción es, en este caso, en el registro civil. De esta manera se crearía un clima de gran seguridad jurídica al incluir a la unión de hecho dentro de los hechos inscribibles en un registro nacional.

Abordando ya las modificaciones legislativas que propugna el texto, debemos centrarnos primero en la materia civil, que seguida la misma línea que las proposiciones anteriores. Como mención que ya prevé la subrogación del conviviente supérstite en el contrato de arrendamiento.

En el código penal se incluiría a aquellos que han suscrito contratos de unión civil dentro de la circunstancia mixta de parentesco del artículo veintitrés.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial se verían modificados los apartados uno y dos del artículo 219 al equiparar a los que han suscrito el contrato de unión civil con los cónyuges para que no puedan formar parte de la misma audiencia o tribunal o para las causas de recusación al mismo nivel que el matrimonio.

En la ley de habeas corpus se quiere modificar para que ahora la persona con la que se ha suscrito el contrato de unión civil pueda interponer el procedimiento.

En materia tributaria, de función pública y en el estatuto de los trabajadores no encontramos cambios reseñables en relación con las ya expuestas.

5. REGULACIÓN AUTONÓMICA. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA AUTONÓMICA DE PAREJAS DE HECHO.

Como ya hemos ido señalando a lo largo de las paginas anteriores en España se ha creado una suerte de reino de taifas alrededor de la figura de las uniones de hecho. Esto es debido a que, ante la falta de una previsión legislativa nacional de dicha institución, han sido las comunidades autónomas las que ha recogido el relevo de la juridificación de este fenómeno⁴⁷. Como es de esperar esta dispersión normativa dificulta aún más la concepción y el tratamiento unívoco de las parejas de hecho.

En las siguientes páginas trataremos de desgranar la situación actual de las parejas de hecho en España. Iremos viendo las distintas regulaciones que ha brindado cada territorio autonómico de España y atendiendo a cómo han plasmado la figura en sus distintas leyes con la finalidad de cómo cada una de ellas a solventado o no los puntos más conflictivos de la institución, y de esta manera resolver la duda de si las uniones de hecho son una realidad homogénea en nuestro país. Es por eso que esto no tratará de ser un análisis pormenorizado de cada ley concreta, sino que, más bien, se examinará de manera distinta cada ley para poder detenernos en los puntos más relevantes o característicos de cada una de ellas pero siempre analizando unos mismos puntos clave que serán: la nomenclatura utilizada, los requisitos personales de los miembros, el ámbito de aplicación, la constitucion de la pareja, la regulación de la pareja en el aspecto económico-patrimonial y personal y la extinción de la unión. Estudiando esta serie de puntos podremos ver los aspectos más esenciales de la vida de la pareja desde su nacimiento hasta su extinción.

5.1 Navarra

Comenzaremos este análisis del marco legislativo español con la más antigua de las leyes sobre la materia que sigue en vigor a día de hoy, que no es otra que la Ley Foral 6/2000, de 3 de Julio, para la igualdad de las parejas estables.

Esta norma se encuentra en una situación muy particular, ya que se encuentra prácticamente vacía de contenido y de sus trece artículos originales en su redacción del año 2000, tan solo continúan el articulo trece y un solo apartado del articulo doce. Esto

⁴⁷ Sírvasse como muestra de esto la lista de las distintas leyes autonómicas de la página 20 de este estudio.

encuentra su motivo por dos razones, en primer lugar, la sentencia 93/2013 del Tribunal Constitucional, que más adelante veremos en detalle, declaró la nulidad parcial del texto al entender este como inconstitucional. Después de esto, en el año 2019, la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo derogaría mediante la disposición derogatoria tercera los artículos uno, dos, tres, cuatro, cinco y ocho.

Esto no va a suponer que las uniones de hecho en Navarra no estén sometidas a ninguna regulación, sino que ahora encontraremos una dispersión de las normas que rigen la institución en lugar de encontrarlas aglutinadas en una sola ley.

La mayor parte del contenido normativo lo encontraremos en el Título VII, del Libro I (leyes ciento seis a ciento trece) de la compilación de derecho Foral de Navarra.

El concepto de la pareja estable navarra no lo encontraremos de manera explícita en la compilación más allá de decirnos la Ley ciento seis que deberán ser dos mayores de edad o menores emancipados en comunidad de vida afectiva análoga a la conyugal.

La misma Ley ciento seis nos dirá que la pareja deberá manifestar su voluntad en documento público y que la inscripción en el registro tendrá efectos de prueba y publicidad, pero no constitutivos.

En cuanto a las prohibiciones personales para poder constituirse en pareja de hecho las encontramos en la ley ciento siete de un modo bastante escueto, ya que tan solo recogerá dos motivos por los cuales las personas no podrán unirse, los cuales serán que uno o ambos de ellos se encuentren en constante matrimonio o pareja de hecho y tampoco las personas relacionadas por parentesco consanguíneo o adoptivo en línea recta o en línea colateral dentro del segundo grado.

La ley ciento nueve regulará varios aspectos de la constante convivencia de los miembros de la manera siguiente:

“Régimen constante la pareja estable. Los miembros de la pareja podrán regular mediante pacto los aspectos personales, familiares y patrimoniales de su relación, así como sus derechos y obligaciones.

Vivienda familiar. Resultará de aplicación a la disposición de la vivienda familiar lo dispuesto en la ley 81, salvo pacto en contrario entre los miembros de la pareja.

Gastos comunes y contribución. Son gastos comunes de la pareja todos los que sean precisos para subvenir a sus necesidades y a las de sus hijos comunes, así como los derivados de la alimentación y habitación en la vivienda familiar de los hijos no comunes.

En defecto de pacto, los miembros de la pareja estable contribuirán al mantenimiento de la vivienda familiar y gastos comunes en proporción a sus medios económicos, computándose a tal fin el trabajo personal prestado para la familia y la dedicación a los hijos, sean o no comunes, y al resto de personas que con ellos convivan.

Responsabilidad frente a terceros. Ambos miembros de la pareja responderán solidariamente ante terceros de las obligaciones contraídas por uno de ellos por los gastos a que se refiere el apartado anterior si se acomodan a los usos sociales y sin perjuicio de los reembolsos que correspondan, en su caso, conforme a sus relaciones internas.”

Esto supondrá que impera la libertad de pactos para la regulación de la convivencia y de los aspectos personales, familiares y económico-patrimoniales de la relación. En defecto de pacto la propia ley establece unas reglas generales en las que se dispone que los miembros contribuirán en función de sus medios.

Las casusas de extinción y las causas que esta tendrá los encontraremos en las leyes ciento diez a ciento trece.

“Ley 110.

Causas de extinción. La pareja estable se extingue:

- 1. Por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de sus miembros.*
- 2. Por matrimonio de uno de sus miembros y por el matrimonio entre ambos.*
- 3. Por mutuo acuerdo de sus miembros.*

4. Por voluntad de uno de sus miembros notificada fehacientemente al otro.

5. Por cese de la convivencia con ruptura efectiva de la comunidad de vida.”

los efectos de la extinción de la unión podrán ser pactados por los miembros de la pareja siempre y cuando esto se haga mediante escritura pública, y los derechos sucesorios de los miembros serán los que se hubieran otorgado los miembros entre sí o por cualquiera de ellos en favor del otro, conjunta o separadamente, por testamento, pacto sucesorio, donación “mortis causa” y demás actos de disposición reconocidos en la compilación de derecho navarro.

El artículo trece de la ley foral de parejas de hecho del año 2000 regulará el régimen de función pública por el cual se tomará los miembros de la pareja de hecho como cónyuges en cuanto a licencias, permisos, situaciones administrativas, provisión de puestos de trabajo, ayuda familiar y derechos pasivos.

5.2 Islas baleares

Comenzaremos este análisis del marco legislativo español con la más antigua de las leyes sobre la materia que sigue en vigor a día de hoy, que no es otra que la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables de las Islas Baleares.

El primer punto en el que debemos detenernos brevemente es la nomenclatura utilizada para referirse a la institución, en este caso las llamará parejas estables, no será la única ley que utilice esta expresión, ya que sucederá lo mismo en la ley asturiana y en el código civil catalán.

En cuanto a la descripción que nos brinda de las parejas estables, el legislador balear a seguido una línea idéntica a los conceptos doctrinales anteriormente explicados definiendo a estas como:

(...) las uniones de dos personas que convivan de forma libre, pública y notoria, en una relación de afectividad análoga a la conyugal.⁴⁸

⁴⁸ Artículo 1 de la ley balear

No debemos salirnos del primer artículo de la ley para encontrar en su segundo punto que en el caso de las Islas Baleares la inscripción en el registro de parejas de hecho de la comunidad autónoma es un requisito necesario para la constitución de la pareja.

Si saltamos hasta su segundo artículo encontramos los requisitos personales que se establecen para poder constituirse como pareja de hecho. El legislador ha plasmado estos requisitos de manera negativa, estableciendo una lista de prohibiciones para constituirse en pareja de hecho, en primer lugar, deja claro que solo podrán hacerlo los mayores de edad o menores emancipados y a continuación establece que no podrán tampoco:

- a) Los que estén ligados por vínculos matrimoniales.*
- b) Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.*
- c) Los colaterales por consanguinidad o adopción hasta el tercer grado.*
- d) Los que formen pareja estable con otra persona, inscrita y formalizada debidamente.*

No resultan especialmente llamativas estas prohibiciones, ya que se ajustan perfectamente a la descripción que nos viene dada en el artículo inmediatamente anterior.

En su segundo párrafo se establece el ámbito de aplicación de la norma⁴⁹, el caso de las Islas Baleares es relativamente poco común ya que establece que será necesaria la vecindad civil de ambos miembros de la pareja, cosa que como veremos más adelante es poco común.

La ley dedicará el título segundo a la regulación de la pareja constante convivencia, para ello, el artículo 4 dispone que regularán las relaciones personales y patrimoniales de la pareja los propios miembros por medio de pactos, los cuales podrán ser tanto verbales como escritos. Estos pactos podrán incluso contemplar posibles compensaciones económicas en el caso de extinción de la pareja. En todos los derechos y obligaciones de los miembros de la pareja tanto con respecto a la administración como entre sí mismos se entenderán equiparados a los cónyuges.⁵⁰

⁴⁹ Como veremos a medida que vayamos avanzando por las distintas normas, este será uno de los puntos más conflictivos y que mayores diferencias y controversias suscita.

⁵⁰ Artículos 6 y 7 y disposiciones adicionales primera y segunda.

El artículo quinto resulta interesante, ya que establece un régimen económico supletorio en defecto de pacto de los miembros de la pareja. Se dispone que en caso de no existir pacto deberán los miembros contribuir en proporción a sus recursos. No será la única ley que contemple esta posibilidad como más adelante veremos.

La ley dedicará los artículos 8 a 13 a la extinción de la unión y los efectos de esta. Sobre las causas de la extinción la ley balear no supone ninguna particularidad y dispone en el artículo ocho lo siguiente:

1. Las parejas estables se extinguen por las siguientes causas:

- a) Por mutuo acuerdo.*
- b) Por voluntad de uno de los miembros, notificada de forma fehaciente al otro.*
- c) Por cese afectivo de la convivencia durante un período superior a un año.*
- d) Por matrimonio de uno de sus miembros.*
- e) Por muerte o declaración de muerte de uno de los integrantes.*

En los artículos siguientes, en los que se recoge los efectos del cese de la unión, la ley balear es bastante completa y recoge la posibilidad, en el artículo nueve, de solicitar por una de las partes una pensión compensatoria, en el caso de no existir los pactos contemplados en el artículo cuarto. Por su parte, el artículo once prevé la guarda y el régimen de visitas de los hijos en similares términos a como se recoge para los matrimonios. Por último, los artículos 12 y 13 están destinados a la extinción de la unión por razón de fallecimiento de uno de los miembros, y se hace de nuevo una equiparación entre el miembro superviviente y el cónyuge viudo.

5.3 Madrid

En Madrid las uniones de hecho están regidas por la Ley 11/2001, de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid. La constitucionalidad de esta norma será analizada por la sentencia del Tribunal Constitucional 81/2013, por la cual varios artículos se verán derogados como veremos más adelante. Como podemos comprobar en este caso se

refieren al fenómeno como uniones de hecho y es definido en el artículo primero de la ley de la siguiente manera:

La presente Ley será de aplicación a las personas que convivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al menos durante un período ininterrumpido de doce meses, existiendo una relación de afectividad, siempre que voluntariamente decidan someterse a la misma mediante la inscripción de la unión en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.

Aunque a priori se siga una manera prácticamente idéntica a lo visto en la anterior ley, Madrid introduce un requisito importante, ya que hace necesario que los miembros de la pareja hayan convivido de manera previa e ininterrumpida durante al menos doce meses.

No debemos salir del mismo artículo para encontrar el ámbito de aplicación de la ley, ya que se establece que para que la pareja se vea cubierta por esta al menos un miembro deberá estar empadronado y tener su residencia en la comunidad de Madrid.

En cuanto a los requisitos personales para formar parte de una unión de hecho, son recogidos en el artículo segundo y la ley se manifiesta en términos prácticamente idénticos a las demás leyes examinadas sin presentar ninguna particularidad reseñable.

Como ya hemos indicado la inscripción de la unión en el registro de la comunidad de Madrid tendrá efectos constitutivos, es por ello que, el artículo tercero recoge como deberá ser la manera de acreditación en el registro de los requisitos que se establecen en el artículo uno. Es curioso dentro de esta ley que para acreditar la efectiva convivencia previa deberá hacerse por medio de la declaración de dos testigos mayores de edad.

En cuanto a la regularización de la pareja en constante convivencia, el artículo cuatro presenta un sistema bastante similar a la ley balear en todos sus términos, pero en este caso solo se recogen los pactos relativos a las relaciones económicas durante y tras la convivencia. En el caso de Madrid deberá darse siempre por escrito y en escritura pública. Los artículos ocho y nueve hacen una equiparación, nuevamente, entre la unión de hecho y el matrimonio en relación con la administración pública.

Por último, en relación con la extinción de la unión la ley madrileña es bastante escueta y tan solo establecen las causas y como deberá darse la inscripción de esta. En cuanto a las causas son las siguientes:

1. Las uniones de hecho se extinguen por las siguientes causas:

- a) De común acuerdo.*
- b) Por decisión unilateral de uno de los miembros de la unión notificada al otro por cualquiera de las formas admitidas en Derecho.*
- c) Por muerte o declaración de fallecimiento de uno de los miembros de la unión de hecho.*
- d) Por separación de hecho de más de seis meses.*
- e) Por matrimonio de uno de los miembros.*

Como vemos no se presenta ninguna particularidad más allá del reducido espacio temporal que se establece en el apartado d).

5.4 Asturias

En Asturias las parejas de hecho encuentran su regulación en la Ley 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables. Esta será la única comunidad autónoma, junto con Cataluña, que se referirá a la institución como parejas estables.

En cuanto a la definición de la pareja estable que facilita la ley la podemos encontrar en el artículo tercero de la misma, el cual nos dice lo siguiente:

1. A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considera pareja estable la unión libre y pública, en una relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su sexo, de dos personas mayores de edad o menores emancipadas sin vínculo de parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o colateral hasta el segundo grado, siempre que ninguna de ellas esté unida por un vínculo matrimonial o forme pareja estable con otra persona.

2. Se entenderá que la unión es estable cuando los miembros de la pareja hayan convivido maritalmente, como mínimo un período ininterrumpido de un año, salvo que tuvieran descendencia común, en cuyo caso bastará la mera convivencia, o salvo que hayan expresado su voluntad de constituir una pareja

estable en documento público, o se hayan inscrito en el Registro de Uniones de Hecho del Principado de Asturias.

3. La existencia de pareja estable o el transcurso del año de convivencia podrán acreditarse a través de cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

En un mismo artículo la ley asturiana nos define lo que entiende como unión de hecho o pareja estable, además de que recoge los requisitos personales que deben cumplir los miembros de la unión. Los puntos más destacables que podemos encontrar es que en Asturias se rebaja en un grado el parentesco colateral que pueden tener los miembros de la unión, y que, como hemos visto que sucedía en Madrid, se requiere un periodo mínimo de convivencia previa, que en este caso, a diferencia de lo que sucedía en la anterior ley, podrá no tenerse en cuenta en el caso de que exista descendencia común, en cuyo caso valdrá la mera convivencia, o salvo que hayan manifestado su voluntad de constituirse en pareja estable en documento público o por medio de la inscripción en el registro. Por ello, debemos entender que en el caso de la comunidad autónoma del Principado de Asturias no se entiende a la inscripción de la pareja como un requisito necesario para la constitución de esta.

Para encontrar el ámbito de aplicación de la ley debemos acudir al artículo anterior, ya que es en el artículo segundo en el que se establece que será de aplicación cuando ambos miembros se encuentren empadronados en la comunidad autónoma.

La convivencia y las relaciones personales y patrimoniales aparecer reguladas en los artículos quinto y sexto de la ley, en los cuales se nos dice que los pactos entre los miembros deberán darse por escrito, ya sea en documento público o privado, los cuales también podrán recoger posibles compensaciones tras el cese de la convivencia. Sin embargo, no se establece por medio de este artículo ningún régimen supletorio. El artículo sexto nos dice, en relación con la guarda y custodia de los menores, que deberemos acudir a la legislación civil.

Sobre las relaciones de los miembros de la pareja con la administración pública volvemos a encontrar una equiparación entre las uniones de hecho y el matrimonio a tenor de los artículos siete, nueve y diez.

La ley asturiana tan solo dedica el artículo cuarto artículo a la disolución de la unión. En este se establece las mismas causas y los mismos efectos que en las anteriores

leyes analizadas, con la particularidad del apartado f), en el cual se nos dice que la relación también puede extinguirse en los casos pactados por las partes en escritura pública.

5.5 Andalucía

La institución se ve regulada en Andalucía por media de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho. Esta es la primera de las normas que encontramos que se refiere al fenómeno como parejas de hecho, cosa que por otra parte es lo más común en la mayoría de las leyes.

La definición de pareja de hecho la vamos a encontrar en el artículo tercero de la ley, el cual dice lo siguiente:

1. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por pareja de hecho la unión de dos personas, con independencia de su opción sexual, a fin de convivir de forma estable, en una relación de afectividad análoga a la conyugal.

2. No podrán formar parejas de hecho, a los efectos de esta Ley:

a) Los menores de edad no emancipados.

b) Los que estén ligados con vínculo matrimonial o pareja de hecho anterior inscrita.

c) Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.

d) Los colaterales por consanguinidad en segundo grado.

De nuevo, la ley andaluza, establece la prohibición hasta el segundo grado en los colaterales.

Sobre el ámbito de aplicación debemos acudir al artículo segundo de la ley. En este se nos dice que, al menos, uno de los miembros deberá estar empadronado en la comunidad autónoma y ninguno puede estar inscrito en otro registro.

La regulación de las relaciones de los miembros constante convivencia, aunque solo las patrimoniales lo encontraremos en los artículos diez y siguientes de la ley. Si bien el artículo diez establece la libertad de pacto entre las partes no nos dice nada con respecto

a la forma que deberán tener estos, por lo cual debemos entender que otorga una libertad de forma.

Sobre las relaciones con las administraciones públicas y las posibles equiparaciones con el matrimonio la ley andaluza resulta ser bastante concreta, ya que en los artículos 15 y siguientes se enumeran una serie de casos como las residencias de personas mayores en el artículo dieciséis, la rehabilitación de drogodependencia en el artículo diecisiete, o la intervención e información sanitaria en el dieciocho, y como deberá de ser el reconocimiento del miembro de la pareja de hecho en tales, en los artículos siguientes se darán una serie de supuestos en los que hay una concreta equiparación con el matrimonio.

Por último, los artículos doce y trece de la ley nos hablan de la extinción de la unión. El artículo doce regulará las causas y efectos de la disolución de la manera que hemos visto en las anteriores leyes. Sin embargo, el artículo trece sí que nos presenta una particularidad, ya que establece que, en defecto de pacto, el miembro de la pareja superviviente tendrá derecho a residir en la vivienda habitual durante un año.

5.6 Islas Canarias

En el caso de las Islas Canarias las parejas de hecho son encontradas reguladas por la Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La definición de las parejas de hecho que nos proporciona esta ley la vamos a encontrar en el primero de sus artículos, en el cual se nos dice lo siguiente:

La presente Ley será de aplicación a las personas que convivan en pareja de forma libre, pública y notoria, vinculados de forma estable con independencia de su orientación sexual, al menos durante un periodo ininterrumpido de doce meses, existiendo una relación de afectividad, siempre que se cumplan las exigencias establecidas en el artículo siguiente.

Nos encontramos con que de nuevo se exige un periodo de convivencia mínimo previo para poder considerarse como pareja de hecho, sin embargo, el segundo párrafo

del artículo dará la posibilidad de omitir este intervalo de tiempo y que valga con la mera convivencia en el caso de que exista descendencia común.

En relación con los requisitos personales de los miembros de la pareja que encontramos en el artículo segundo serán los mismos que en las leyes anteriores.

El ámbito de aplicación de la ley lo volveremos a encontrar en el artículo segundo, y de nuevo requerirá que al menos uno de los miembros de la pareja se encuentre empadronado en la comunidad autónoma.

Con respecto a la regulación de la convivencia y las compensaciones tras esta, encontramos un panorama muy similar al que ya veíamos en el caso de las Islas Baleares en el que se permite que los pactos de las relaciones económico-patrimoniales y personales de los miembros pueda llevarse a cabo de forma verbal o escrita y de ser escrita en documento público o privado.

Los artículos once y doce serán los que se encarguen de regular la relación de los miembros de la pareja con la administración, y al igual que hemos ido viendo en las leyes anteriores se hará una equiparación entre la pareja y el matrimonio, pero en este caso, con la excepción del tramo autonómico del IRPF, a tenor del artículo doce.

Sobre la extinción de la pareja la ley dedica los artículos nueve y diez, sin embargo, la regulación de la ley ante esta parte de la vida de la unión resulta bastante escueta, ya que en el artículo nueve, tan solo se recogen las causas de esta y en el diez la necesidad de la inscripción en el registro. Las causas de extinción serán las mismas que ya hemos visto en anteriores normas con la particularidad de que se considerará que la relación se ha extinguido tras el efectivo cese de la convivencia durante seis meses, en lugar de durante un año, al igual que sucedía con Madrid.

5.7 Extremadura

En la comunidad de Extremadura la institución se encuentra regulada por la ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Como podemos ver, ya va siendo más apreciable la tendencia del legislador autonómico de referirse a la institución como parejas de hecho.

La definición que encontramos en la ley extremeña, al igual que los requisitos personales de los miembros están el artículo dos de la ley:

1. A los efectos de la aplicación de la presente Ley, se considera pareja de hecho la unión estable, libre, pública y notoria, en una relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su sexo, de dos personas mayores de edad o menores emancipadas, siempre que voluntariamente decidan someterse a la misma mediante la inscripción de la pareja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Se entenderá que la unión es estable cuando los miembros de la pareja hayan convivido, como mínimo, un período ininterrumpido de un año, salvo que tuvieran descendencia común, en cuyo caso bastará la mera convivencia, o salvo que hayan expresado su voluntad de constituir una pareja estable en documento público.

En el caso de que un miembro de la pareja o ambos estén ligados por vínculo matrimonial a otra persona al tiempo de iniciar la relación, el tiempo de convivencia transcurrido hasta el momento en que el último de ellos obtenga la disolución o, en su caso, la nulidad, se tendrá en cuenta en el cómputo del período indicado de un año.

3. La inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura tendrá carácter constitutivo.

4. Las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación a aquellas parejas de hecho en las que al menos uno de los miembros de la pareja se halle empadronado y tenga su residencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En el caso de Extremadura sucederá como ya hemos visto en Asturias, que pese a existir un periodo de convivencia mínimo de un año se entenderá que basta con la simple convivencia cuando haya descendencia común o hayan manifestado en escritura pública a la voluntad de constituirse en pareja de hecho. Además, en este caso la inscripción en el registro contará con un carácter constitutivo. Una novedad que incorpora esta ley es que entiende que el tiempo de convivencia se tendrá en cuenta, aunque uno o ambos miembros hayan pasado parte de ese periodo en constante matrimonio una vez hayan obtenido la disolución.

En cuanto al ámbito de aplicación será el propio apartado cuatro del artículo que será necesario que al menos uno de los miembros se halle empadronado en la comunidad autónoma.

Sobre los pactos entre las partes para las relaciones durante la convivencia la ley solo plantea la posibilidad de los pactos patrimoniales, los cuales deberán estar en escritura pública, además plantea un sistema subsidiario por el cual se entenderá que en defecto de pacto cada uno de ellos contribuirá en función de sus recursos. También se establece una compensación en defecto de pacto al cese de la convivencia. Los artículos siete y ocho establecerán una equiparación entre la pareja y el matrimonio en el caso de acogimiento de menores y de guarda y custodia y regímenes de visitas de menores.

Los artículos diez y siguientes establecerán una equiparación entre el matrimonio y la pareja de hecho en las relaciones de los miembros de esta con la administración pública.

La disolución de la pareja aparece contemplada en el artículo quinto de la ley en los mismos términos de las anteriores.

5.8 País Vasco

En el País Vasco las parejas de hecho se encuentran reguladas por la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las Parejas de Hecho.

Con respecto a la definición de la unión de hecho que proporciona la ley en su segundo artículo encontramos lo siguiente:

Primero. A los efectos de la aplicación de esta ley, se considera pareja de hecho la resultante de la unión libre de dos personas mayores de edad o menores emancipadas, con plena capacidad, que no sean parientes por consanguinidad o adopción en línea recta o por consanguinidad en segundo grado colateral y que se encuentren ligadas por una relación afectivo-sexual, sean del mismo o de distinto género. Asimismo, ambos miembros de la pareja deberán cumplir el requisito de no estar unidos a otra persona por vínculo matrimonial o pareja de hecho.

Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a las parejas de hecho constituidas en los términos del artículo 3 y siguientes de la ley.

A tal efecto podrán inscribirse aquellas parejas de hecho en las que al menos uno de sus integrantes tenga vecindad civil vasca.

En un mismo artículo la ley condensa la definición de la pareja de hecho y los requisitos personales que deben cumplir los miembros, además de que nos dice en su último párrafo que para que la ley sea de aplicación, al menos uno de los miembros deberá poseer la vecindad civil vasca, una rara avis que ya habíamos visto en el caso de las islas baleares. Además, como nos indicará el artículo tercero de la ley, será necesario que los miembros inscriban la pareja de hecho en el registro para entender que esta se halla constituida de manera efectiva.

La ley vasca dedicará los artículos cinco y siguientes al régimen de las relaciones personales y económico-patrimoniales de la pareja constante convivencia. Para ello dispondrá que los pactos entre las partes podrán llevarse a cabo en escritura pública o de manera privada. El artículo 5.3 dispone un régimen supletorio a falta de pacto, y establece que será el de separación de bienes. También establecerá una compensación tras el cese de la convivencia en defecto de pacto.

En cuanto a las relaciones con la administración la ley establece en sus artículos diez y siguientes una serie de casos concretos en los que hace una equiparación de la pareja de hecho con el matrimonio, siguiendo el ejemplo de la ley de Andalucía. También encontramos una equiparación entre ambas instituciones en el caso de la adopción y el acogimiento de menores y los regímenes sucesorios a tenor de los artículos siete, ocho y nueve. La disposición adicional segunda señala que en todo lo mencionado expresamente en la ley habrá, nuevamente, una equiparación con el matrimonio.

Los artículos dieciocho y diecinueve están dedicados a la extinción de la pareja y a sus efectos, y son regulados en los mismos términos que las anteriores salvo por el hecho de que en el País Vasco no se prevé la extinción por razón de no convivir durante un determinado tiempo.

5.9 Cantabria

En Cantabria las parejas de hecho se encuentran reguladas por la Ley 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Para encontrar la definición y requisitos personales necesarios para constituirse como pareja de hecho en Cantabria debemos acudir a los artículos 4.2 a 4.5 de la ley. La mayor particularidad que encontraremos en Cantabria a este respecto es que se exigirá, como ya hemos visto en leyes anteriores, un periodo mínimo de convivencia, el cual no tendrá por qué darse en el caso de que exista descendencia común o si ya viniesen estando inscritas en otro registro. A diferencia del caso de Madrid, para la acreditación de esta convivencia no valdrá la declaración de las partes o de testigos. Además, para poder constituirse como pareja de hecho, señalan los artículos uno, cinco y seis, que será necesaria la inscripción en el registro.

En Cantabria los pactos de regulación de las relaciones personales y económico-patrimoniales se encontrarán regulados en los artículos ocho y nueve, estableciendo estos que deberán darse en escritura pública para constar de validez. En la ley cántabra también habrá artículos destinados a los regímenes aplicables en el caso de guarda de menores, regímenes de visitas y acogimientos y adopción, en los que encontraremos una equiparación a los cónyuges.

Sobre las relaciones con la administración y derecho público encontramos otra lista de supuestos concretos siguiendo la línea de las leyes vasca y andaluza en los que se vuelven a hacer equiparaciones de los miembros de la pareja con los cónyuges y con los familiares y allegados. Sobre estas equiparaciones tiene importancia la disposición adicional primera que recoge que todas las menciones al matrimonio en leyes anteriores a esta se deberán entender que recoge también a las parejas de hecho.

Sobre la disolución de la unión de hecho encontramos los artículos once y doce de la ley, los cuales no contienen ninguna diferencia reseñable con lo visto en otras leyes.

5. 10 Galicia

Las parejas de hecho en Galicia aparecen reguladas tanto en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia, como en el Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, por el que se crea y regula el registro de parejas de hecho de Galicia.

Sobre la definición de la pareja de hecho debemos acudir a la disposición adicional tercer de la ley 2/2006, la cual dicta lo siguiente:

1. A los efectos de la aplicación de la presente ley, se equiparán al matrimonio las relaciones maritales mantenidas con intención o vocación de permanencia, con lo que se extienden a los miembros de la pareja los derechos y las obligaciones que la presente ley reconoce a los cónyuges.

2. Tendrán la condición de parejas de hecho las uniones de dos personas mayores de edad, capaces, que convivan con la intención o vocación de permanencia en una relación de afectividad análoga a la conyugal y que la inscriban en el Registro de Parejas de Hecho de Galicia, expresando su voluntad de equiparar sus efectos a los del matrimonio. No pueden constituir parejas de hecho:

a) Los familiares en línea recta por consanguinidad o adopción.

b) Los colaterales por consanguinidad o adopción hasta el tercer grado.

c) Los que estén ligados por matrimonio o formen pareja de hecho debidamente formalizada con otra persona.

3. Los miembros de la unión de hecho podrán establecer válidamente en escritura pública los pactos que estimen convenientes para regir sus relaciones económicas durante la convivencia y para liquidarlas tras su extinción, siempre que no sean contrarios a las leyes, limitativos de la igualdad de derechos que corresponden a cada conviviente o gravemente perjudiciales para cada uno de los mismos.

Serán nulos los pactos que contravengan la anterior prohibición.

Por tanto, en cuanto a la definición se seguirá la misma línea que en todas las leyes anteriores. Los requisitos personales los encontraremos regulados tanto esta misma disposición adicional como en el artículo quinto del reglamento. Será el mismo artículo quinto el que establezca que también será necesario para la aplicación de las normas gallegas que al menos uno de los miembros goce de vecindad civil gallega y que ambos se encuentren empadronados en el mismo domicilio dentro de la comunidad autónoma.

Sobre los pactos entre las partes la disposición adicional tan solo recoge los económicos, los cuales deberán llevarse a cabo por escritura pública.

Las causas de la extinción de la pareja de hecho la podemos encontrar en el artículo 23 del decreto, el cual es respectivo a la cancelación de la inscripción en el registro, pero contiene los mismos casos y causas que los artículos destinados a la extinción de las parejas de hecho que hemos visto en las anteriores leyes.

5. 11 Cataluña

El caso de Cataluña no encontraremos una ley concreta para la regulación de las parejas de hecho, sino que esta se encontrará dentro de su propio Código Civil, así bien destinará los artículos 234.1 a 234.14 a la convivencia de pareja estable que es como el código nombra a las uniones de hecho.

La definición que el código catalán da de pareja estable está en su apartado primero y dice lo siguiente:

Dos personas que conviven en una comunidad de vida análoga a la matrimonial se consideran pareja estable en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Si la convivencia dura más de dos años ininterrumpidos.*
- b) Si durante la convivencia, tienen un hijo común.*
- c) Si formalizan la relación en escritura pública.*

Así pues, no se tendrá por necesaria la inscripción en el registro de parejas de hecho para la constitución de la misma, sino que valdrá con cualquiera de los requisitos que se exponen en este artículo.

Sobre los requisitos personales de los miembros de la unión, el segundo apartado del artículo 234 establece los mismos que en las demás leyes, pero además hay uno de ellos que no hemos visto en ninguna otra, pues prohibirá la constitución a aquellas parejas que convivan con una tercera persona. Además, la prohibición entre parientes colaterales solo se establece hasta el segundo grado.

Para conocer el ámbito de aplicación deberemos acudir a las normas de aplicación del propio código, ya que no se establecen unas concretas para las parejas estables. En este caso encontramos respuesta en el artículo 111.3 del código que establece que este se aplicará en toda Cataluña y para aquellas personas extranjeras con vecindad civil catalana.

Sobre los pactos de convivencia, el artículo 234. 3 establece que serán de aplicación solo los pactos entre los convivientes mientras duren la convivencia, sin especificar en qué forma deberán hacerse estos. Sin embargo, en el 234.5 y 6, respectivos a los acuerdos tras el cese de la convivencia sí que especifica que estos deberán realizarse en escritura pública.

Sobre la extinción de la pareja estable el código catalán es bastante detallado, ya que reserva sus artículos 234.4 a 234.14 a esta y sus efectos. Sobre las causas, no presenta mayores diferencias con las demás autonomías, aunque en su artículo 234.4.1. a) habla del cese de la convivencia con ruptura de la pareja, sin especificar el concreto significado de la expresión ruptura de la relación y sin establecer ningún criterio temporal al cese de la convivencia. Sobre los efectos de la extinción el código civil plantea varias equiparaciones con el sistema seguido para los matrimonios con relación a la guarda y custodia de los hijos, pensiones alimenticias y compensaciones de trabajo y atribución de la vivienda y derechos viudales en caso de extinción por muerte.

5.12 Aragón

Aragón, al igual que Cataluña cuenta con su propio derecho foral, razón por la cual la regulación de las parejas de hecho, o parejas estables no casadas, como son bautizadas en Aragón, se llevará a cabo por el código civil aragonés, concretamente la encontraremos en los 303 a 315.

Sobre la definición que nos brinda el artículo 303 no habrá ninguna particularidad con las definiciones ya dadas, al igual que sucederá con los requisitos personales del artículo 306, los cuales seguirán con la tónica general del resto de autonomías. Pese a ello, es de mención que el artículo 304 establece que toda pareja estable no casada deberá estar inscrita para que le sea de aplicación lo establecido en el código, lo que supone que la inscripción será un requisito constitutivo.

Para la regulación de la convivencia el código dedica los artículos 307 y 308, en los cuales se dispone que los convivientes podrán regularse por medio de pacto en escritura pública y que en defecto de este cada uno contribuirá según sus capacidades. Además, el 308 brinda la posibilidad de que los miembros eleven estos pactos a capitulaciones matrimoniales en el caso de que decidan contraer matrimonio.

A la extinción de la pareja y sus efectos se dedican los artículos 309 y siguientes. Las causas de extinción serán las usuales, además de que en caso de extinción en vida los miembros no podrán constituir una nueva relación hasta transcurridos seis meses desde el trámite de dejar sin efectos la anterior y haber revocado todos los poderes que se hubiesen otorgado.

El artículo 310 reconoce la posibilidad de solicitud de compensación para uno de los miembros. El artículo 311 por su parte establecerá los derechos sucesorios del supérstite en caso de fallecimiento de uno de los miembros, disponiendo que al margen de derechos sucesorios podrá este vivir en la vivienda habitual durante un año.

En cuanto a su relación con el derecho público el artículo 315 hace una equiparación de la pareja con el matrimonio en materia tributaria, de la misma manera que lo hacen los artículos anteriores con respecto a la adopción.

Por último, hay que señalar que el artículo 314 hace una mención expresa para aclarar la inexistencia de parentesco de los miembros.

5.13 Valencia

En la comunidad valenciana las parejas de hecho se encuentran reguladas por la ley 5/2012, de 15 de octubre, de parejas de hecho formalizadas de la comunidad valencia. La cual se encuentra parcialmente anulada por la sentencia del tribunal constitucional 110/2016, de 15 de junio, ya que el Tribunal consideró que en algunos de sus preceptos rebasaban el límite de la competencia en materia civil de la comunidad autónoma. Aun con ello analizaremos los preceptos que aún quedan vigentes.

La definición de la unión de hecho que nos da la ley valenciana en su primer artículo se encuentra en la línea de todas las demás definiciones antevistas, así como las prohibiciones o requisitos personales contemplados en el artículo cuarto.

Tanto el ámbito de aplicación como la regulación de la convivencia se encuentran anulados por la sentencia ya mentada.

La extinción de la pareja de hecho del artículo quinto sí que presenta una importante diferencia con respecto a todas las demás, ya que será la única que recoja como causa de extinción de la unión el hecho de que alguno de los convivientes esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro o de la otra o de los hijos o hijas comunes o de cualquiera de ellos o de ellas, y se haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad.

Por último, el artículo quince establece una equiparación entre la pareja de hecho y el matrimonio en los siguientes casos:

1. La regulación de la función pública que es competencia de la Generalitat, en cuanto a licencias, permisos, situaciones administrativas, provisión de puestos de trabajo y ayuda familiar.

2. Los derechos y obligaciones de derecho público establecidos por la Generalitat en materias de su competencia, tales como normas presupuestarias, indemnizaciones, subvenciones y tributos autonómicos.

3. En cuanto a los derechos a percibir pensiones de viudedad y a las indemnizaciones por accidentes laborales o enfermedades profesionales, se estará a lo dispuesto por la legislación aplicable en cada caso.

5.14 Murcia

En la región de Murcia las parejas de hecho se hallan reguladas por la última ley al efecto que se ha publicado en nuestro país, la Ley 7/2018, de 3 de julio, de parejas de hecho en la comunidad autónoma de región de Murcia.

La definición de la pareja de hecho dada por el artículo uno de la ley, así como los requisitos personales de los miembros para constituirse como tal, recogidos en el artículo tercero no encontrarás ninguna diferencia reseñable, tan solo el hecho de que la limitación en la región de Murcia para constituirse en pareja de hecho para parientes colaterales se extiende hasta el tercer grado. Para la efectiva constitución será necesario que la pareja, como dispone tanto el artículo primero como el cuarto, acrediten la existencia de esta ante el funcionario del registro o bien por medio de escritura pública, aunque la inscripción tan solo tendrá efectos declarativos.

El régimen de convivencia para las relaciones personales y económico-patrimoniales no aparece regulado en esta ley, ni constante convivencia ni tras el cese de esta. Así pues, en defecto de legislación deberemos entender que se sigue el criterio de libertad de pacto y libertad de forma.

Los artículos doce a quince de la ley, los cuales establecen las relaciones de la pareja con las administraciones públicas disponen un igual reconocimiento a las parejas de hecho con el matrimonio.

En cuanto a la extinción de la pareja sigue el mismo esquema que en las anteriores leyes y en este caso la separación de los miembros provocará la extinción de la unión a los seis meses. Sin embargo, a diferencia de todas las regulaciones ya vistas no se prevén efectos económicos. El artículo once de la ley dispone nuevamente una equiparación entre las parejas de hecho y el matrimonio en lo relativo a la guarda y régimen de visitas de los hijos.

Con esto hemos visto todas las regulaciones por medio de ley que hay en España del fenómeno de las parejas de hecho, sin embargo, no son las únicas regulaciones, ya que hay una serie de autonómicas que cuentan con una regulación reglamentario del registro de parejas de hecho de sus respectivas comunidades o ciudades autónomas, sin más pasaremos a verlas.

5.15 La Rioja

En la Rioja encontramos la figura regulada por medio del Decreto 30/2010, de 14 de mayo, por el que se crea el registro de parejas de hecho de la Rioja, el cual es modificado por el decreto 10/2013, de 15 de marzo.

En cuanto a la descripción que nos da el decreto riojano de la figura encontramos lo siguiente en su artículo segundo:

Tendrán acceso a este Registro las uniones que formen una pareja estable no casada entre dos personas, con independencia de su sexo, que convivan de forma libre, pública y notoria, cuyos componentes hayan convivido como mínimo un periodo ininterrumpido de dos años, existiendo una relación de afectividad análoga a la conyugal, y teniendo ambos la residencia legal y vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Encontramos un sistema ligeramente más restrictivo en La Rioja si lo comparamos con el resto de las comunidades autónomas, ya que por un lado exige el periodo de mínimo dos años de convivencias, que podrá limitarse a la mera convivencia en el caso de que exista descendencia común, además de que ambos miembros de la pareja cuenten con residencia legal y vecindad administrativa en la comunidad autónoma.

Los requisitos personales del artículo tercero no plantean ninguna diferencia reseñable con las anteriores regulaciones analizadas.

En cuanto a la regulación de la convivencia por medio de pactos entre las partes el artículo cuarto abre la posibilidad a que estos sean inscritos de manera voluntaria, sin hacer mayores precisiones, es por ello que debemos entender que existirá libertad de forma.

5.16 Castilla La Mancha

En la comunidad autónoma de castilla la macha encontramos el Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del registro de parejas de hecho de la comunidad autónoma de castilla la mancha.

En cuanto a la definición de las uniones de hecho que proporciona el decreto encontramos que su artículo segundo no establece ninguna diferencia reseñable, cosa que sucede de igual manera con los requisitos personales de los miembros de la pareja. Además de que la declaración tendrá meros efectos declarativos sobre la constitucion y el único requisito sobre el ámbito de aplicación que existe es que ambos miembros sean residentes en la comunidad autónoma.

Sobre los pactos de relaciones personales y económico-patrimoniales no se hace mayor referencia que su susceptibilidad a ser inscritos, por lo cual debemos entender que existe libertad de forma.

5.17 Castilla y león

En la comunidad autónoma de castilla y león la institución se ve regulada por el Decreto 117/2002, de 24 de octubre, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del registro de parejas de hecho de la comunidad autónoma de Castilla y León.

En cuanto a la definición de las uniones de hecho que proporciona el citado Decreto encontramos que su artículo segundo no establece ninguna diferencia reseñable, cosa que sucede de igual manera con los requisitos personales de los miembros de la pareja. Además de que la declaración tendrá meros efectos declarativos sobre la constitucion y el único requisito sobre el ámbito de aplicación que existe es que ambos miembros sean residentes en la comunidad autónoma y que hayan convivido un periodo mínimo de seis meses.

Sobre los pactos de relaciones personales y económico-patrimoniales no se hace mayor referencia que su susceptibilidad a ser inscritos, por lo cual debemos entender que existe libertad de forma.

6. ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE HAN DECLARADO INCONSTITUCIONALES LAS LEYES DE PAREJAS DE HECHO DE MADRID, NAVARRA Y VALENCIA.

Nos es imposible hablar con propiedad del marco normativo de las parejas de hecho en nuestro país sin hacer referencia a tres importantes sentencias del Tribunal Constitucional, en las cuales se ha pronunciado el tribunal sobre tres de las leyes autonómicas. Con este análisis se pretende, aparte de entender los motivos que llevaron a declarar la inconstitucionalidad parcial de estas leyes, ser conscientes de la acuciante necesidad de una ley que regule la institución sobre todo el territorio nacional.

Las sentencias que procederemos a analizar van a ser la sentencia 81/2003, de 11 de abril, la sentencia 93/2013 de 23 de abril y la sentencia 110/2016, de 9 de junio.

Siguiendo un orden cronológico, comenzaremos a hablar de la STC 81/2013, por la cual se dejaron vacíos de contenido varios artículos de la ley 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.

6.1 Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 81/2013⁵¹

El partido político Familia y Vida presentó un recurso contencioso-administrativo contra el decreto 134/2002, de 18 de junio, por el que se aprueba el registro de uniones de hecho de la comunidad de Madrid al amparo de la ley 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho de la misma comunidad autónoma.

El partido político sostenía que ciertas disposiciones reglamentarias regulaban contenidos de derecho civil, las cuales, según el artículo 149.1.8 de la Constitución es materia de regulación del estado. Debido a este motivo, tanto el reglamento como la ley deberían ser consideradas inconstitucionales, por este motivo se interesó al órgano judicial el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad. El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de Madrid acordó el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para solventar la duda de si efectivamente la ley y el reglamento habían incurrido en un incumplimiento de los

⁵¹ Referencia: ECLI:ES:TC:2013:81

preceptos 149.1.8 y 149.1.18 de la Constitución. Así pues, en auto del 7 de noviembre de 2003, la sala de lo contencioso-administrativo de la comunidad de Madrid plantea cuestión de inconstitucional sobre los preceptos 3,4,5,8 y 9 de la ley madrileña.

El órgano judicial comenzará a examinar de manera pormenorizada la posible inconstitucionalidad de los preceptos aludidos a partir de su cuarto fundamento jurídico. Primeramente, comenzará por el artículo cuatro de la ya mentada ley madrileña⁵² considerando que tal disposición se encuentra “*extramuros*” de las facultades legislativas de la comunidad autónoma y que vulnera las competencias del Estado recogidas en el artículo 149.1.8 de la Constitución, razón por la cual considera tal precepto nulo. Para hacer tal afirmación el tribunal se sostiene en que la disposición objeto de análisis regula esencialmente una relación *interprivatos* en el ámbito de las relaciones personales y patrimoniales. Además, se señala que la regulación, eminentemente civil, que se hace en el artículo encuentra su equivalente en reglas del propio Código Civil. En palabras del propio tribunal:

*“(…) el art. 4.2 remite expresamente a la regulación de la pensión compensatoria en casos de separación o divorcio establecida en el art. 97 del Código civil, mientras que la presunción del art. 4.3 recuerda en su semejanza al art. 1438 del Código civil, relativo al régimen económico matrimonial de separación de bienes. Por su parte, la necesidad de que los pactos consten en escritura pública del art. 4.1 o las limitaciones a los pactos del art. 4 no son sino traslación de lo dispuesto en los arts. 1327 y 1328 del Código civil.”*⁵³

⁵² Dicho artículo cuatro se encontraba redactado en los siguientes términos:

“1. Los miembros de la unión de hecho podrán establecer válidamente en escritura pública los pactos que consideren convenientes para regir sus relaciones económicas durante la convivencia y para liquidarlas tras su cese.

2. Los pactos a que se refiere el número anterior podrán establecer compensaciones económicas cuando, tras el cese de la convivencia se produzca un desequilibrio económico en uno de los convivientes con relación a la posición del otro que implique un empeoramiento respecto a la situación anterior. Tales compensaciones habrán de tomar en consideración las mismas circunstancias a que se refiere el artículo 97 del Código Civil.

3. A falta de pacto se presumirá, salvo prueba en contrario, que los miembros de la unión contribuyen equitativamente al sostenimiento de las cargas de ésta en proporción a sus recursos.

4. Serán nulos y carecerán de validez los pactos contrarios a las leyes, limitativos de la igualdad de derechos que corresponde a cada conviviente o gravemente perjudiciales para uno de ellos. Asimismo, serán nulos los pactos cuyo objeto sea exclusivamente personal o que afecten a la intimidad de los convivientes. 5. En todo caso los pactos a que se refiere este artículo estén o no inscritos en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, sólo surtirán efectos entre las partes firmantes y nunca podrán perjudicar a terceros.”

⁵³ Fundamento Jurídico cuarto.

Con relación al artículo quinto, la valoración que da el Tribunal es exactamente la misma, ya que considera a este tan íntimamente conectado con el anterior que tan solo responde a ser una norma de contenido procedimental para la inscripción de la unión en el registro.⁵⁴

El fundamento jurídico quinto de la sentencia se encuentra referido al análisis de la constitucionalidad del artículo tercero de la ley⁵⁵ respectivo a la acreditación de la unión de hecho. A este artículo se le reprochaba que incurría en materias con reserva exclusiva del estado por el artículo 149.1.8 de la Constitución en lo relativo a la ordenación de registros públicos. Sin embargo, el tribunal no comparte la misma opinión, pues considera que al haber dejado sin efectos los artículos cuatro y cinco, dicha inscripción no desplegaría efectos civiles sobre las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes, y que, en todo caso, la inscripción en el registro ya solo podría servir para la aplicación del régimen jurídico que el legislador autonómico haya decidido establecer, en tanto en cuanto éste no sea civil. Es por estas razones por lo que el tribunal considera que el artículo tercero de la ley madrileña sí que se encuentra dentro de las materias sobre las que las autonomías están autorizadas para legislar, y, por tanto, no considera que sea inconstitucional.

Por último, el fundamento jurídico sexto estudiará la constitucionalidad de los artículos ocho y nueve de la ley⁵⁶ relativos a la normativa de derecho público aplicable y

⁵⁴ La redacción del artículo quinto de la ley madrileña era la siguiente:

“1. Los pactos a que se refiere el artículo 4 podrán inscribirse en el Registro, siempre que en ellos concurren los requisitos de validez expresados en el mismo artículo.

2. La inscripción podrá efectuarse a petición de ambos miembros de la unión conjuntamente.

3. Contra la denegación de la inscripción, que se hará por resolución motivada, podrá interponerse el recurso administrativo que proceda.”

⁵⁵ El artículo tercero de la ley se encuentra redactado de la manera siguiente:

“1. Las uniones a que se refiere la presente Ley producirán sus efectos desde la fecha de la inscripción en el Registro de las Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, previa acreditación de los requisitos a que se refiere el artículo 1 en expediente contradictorio ante el Encargado del Registro.

2. Reglamentariamente se regulará tal expediente contradictorio. En todo caso, la previa convivencia libre, pública, notoria e ininterrumpida en relación de afectividad, habrá de acreditarse mediante dos testigos mayores de edad en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

3. La existencia de la unión de hecho se acreditará mediante certificación del Encargado del Registro.”

⁵⁶ Los artículos octavo y noveno de la ley se encuentran redactados de la siguiente manera:

“Artículo 8. Beneficios respecto de la función pública.

En relación con el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, los convivientes mantendrán los mismos beneficios reconocidos a las parejas que hayan contraído matrimonio.

Artículo 9. Normativa de Derecho Público.

Los derechos y obligaciones establecidos en la normativa madrileña de Derecho Público para los miembros de parejas que hayan contraído matrimonio serán de aplicación a los miembros de la unión de hecho, en especial en materia presupuestaria, de subvenciones y de tributos propios.”

la función pública que desempeñe alguno de sus miembros. La parte recurrente hacia tacha en la constitucionalidad de estos preceptos en tanto en cuanto consideraba que vulneraban el artículo 149.1.18 de la constitucion pues legislaban sobre las bases del régimen estatuario de los funcionarios públicos. Sin embargo, el Tribunal, al igual que en el fundamento jurídico anterior no contempla razones para la reprobación de estos preceptos, pues considera que la equiparación que hace la comunidad de Madrid de las uniones de hecho con respecto del matrimonio en el ámbito de las normas administrativas se encuentra dentro de sus competencias. Defiende el tribunal que tales medidas, siempre que se encuentren dentro de marco de la legislación básica *“pueden ser legítimamente adoptadas por la Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación básica y en ejercicio de sus competencias en relación con el régimen estatutario de sus funcionarios públicos (art. 27.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid) y de ejecución de la legislación laboral (art. 28.1.12).”*⁵⁷

Así pues, el tribunal acuerda la declaración de inconstitucionalidad de, tan solo, dos de los preceptos sobre los que se cuestionaba: el artículo cuatro y el artículo cinco de la ley 11/2001 de la comunidad de Madrid.

No debemos pasar por alto que la sentencia cuenta con el voto particular de dos de los magistrados del tribunal, que son Manuel Aragón Reyes y Andrés Ollero Tassara, sobre el que tampoco nos detendremos demasiado.

En dicho voto manifiestan, que, si bien se hallan en completo acuerdo con vaciar de contenido los artículos cuatro y cinco de la ley, consideran que la inscripción (regulada en el artículo tercero) sí que puede generar efectos más allá de la comunidad autónoma y que podrían generar efectos civiles, razón por la cual considera que habría que declarar nulo al artículo tercero de la ley.

En segundo lugar, los magistrados muestran su disconformidad con el fundamento jurídico sexto en relación con lo que se dispone sobre el artículo octavo de la ley, al considerar que debido a la ambigüedad con la que está redactado el artículo (cosa en la que también repara la sentencia) este sería susceptible de cubrir tanto al funcionariado como al personal laboral y que en el caso de estos últimos la comunidad autónoma se

⁵⁷ Fundamento jurídico sexto.

estaría extralimitando en sus competencias en detrimento de las competencias del Estado vulnerando el artículo 149.1.7 de la Constitución al incurrir en materia laboral.

6.2 Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 93/2013⁵⁸

No pasaría ni un mes hasta que el Tribunal Constitucional volviese a dictar sentencia sobre la constitucionalidad de otra ley autonómica sobre uniones de hecho. En este caso lo haría sobre la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables de Navarra.

En octubre del año 2000 ochenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados plantearon recurso de inconstitucionalidad sobre la totalidad de la ley navarra pues consideraban que esta incurría en la vulneración de los artículos 9.3, 10.1, 14, 18.1, 32, 39 y 149.1.8 de la Constitución.

Para tomar esta medida, la parte recurrente se apoyó en los siguientes extremos, los cuales son recogidos en los antecedentes de hecho de la sentencia:

En primer lugar alegan que si bien la exposición de motivos de la ley recurrida alude directamente al artículo 39 de la Constitución con el objetivo de solventar la discriminación negativa a la que se enfrentan los modelos de familia no fundadas en el seno del matrimonio si se atiende a los artículos dos, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece de la ley se puede observar que el objetivo de esta es el de la asimilación completa de la figura de la unión de hecho dentro de la del matrimonio.

Afirman que la ley incurre en un vicio *in procedendo*, ya que la ley omitió en su texto de aprobación que requería de una mayoría absoluta para su aprobación desatendiendo así el procedimiento recogido en el artículo veintidós de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (en adelante LORAFNA). Lo cual podría ser susceptible de violar el principio de seguridad jurídica y publicidad recogido en el artículo 9.3 de la Constitución.

Consideran que se infringe el artículo 149.1.8 de la Constitución y el artículo 2.2 LORAFNA, ya que la ley entraría a regular aspectos jurídico-civiles de las relaciones de las formas de matrimonio, los cuales son de competencia exclusiva del Estado. Consideran los recurrentes que, si bien Navarra dispone de sus propias normas civiles que

⁵⁸ Referencia: ECLI:ES:TC:2013:93

podrán modificar, la incorporación de una figura nueva de matrimonio, como se considera que se hace con esta ley, solo puede corresponder al Estado.

Además, se estaría haciendo una vulneración de los derechos al libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución), a la intimidad personal y familiar (artículo 18.1 de la Constitución) y al derecho a no contraer matrimonio (artículo 32 de la Constitución). Defienden esta postura en la idea de que existen unos determinados efectos irrenunciables, además de que consideran que aquella pareja que se constituye en pareja de hecho y no en matrimonio es porque busca no verse sometido a determinado régimen jurídico que, con la regulación navarra y su equiparación entre unión de hecho y matrimonio, les sería obligatorio.

Se alega también que la LORAFNA recoge la competencia exclusiva del estado para la creación de normas sobre la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, por lo que el artículo 2.3 de la Ley Foral estaría vulnerando los artículos 2.2 y 43 LORAFNA, en relación con el artículo. 149.1.8 CE y los artículos 14 y 149.1.1 de la Constitución.

Señalan los recurrentes la inexistencia de una norma de conflicto sobre parejas de estables en el derecho civil, pero tomando en consideración los el artículo 9.2 del Código Civil en el cual sí que se recoge una norma de conflicto aplicable al matrimonio, la ley foral estaría contraviniendo el criterio estatal al establecer sus propias reglas (ley personal común; a la personal de alguno de los cónyuges o la de la residencia elegida de común acuerdo; a falta de elección, a la ley de residencia habitual común; y, finalmente, a la del lugar de celebración).

Finalmente, la parte recurrente comienza a señalar todas las vulneraciones señaladas dentro del articulado de la ley:

El artículo tercero contraviene el principio de seguridad jurídica al expresarse al mostrar gran grado de laxitud en la acreditación de la pareja estable, pues un régimen de derecho público no debería quedar al arbitrio de las partes ya que podría generar fraudes de ley.

El artículo cuarto constituiría una violación del principio de libre desarrollo de la personalidad al limitar a aquellos quienes deciden establecer una convivencia al margen de fórmulas estereotipadas reconocidas por el Estado.

El artículo quinto estaría violando el principio de igualdad al crear una *ex novo* pensiones para la pareja estable en detrimento del matrimonio civil. Misma valoración

reciben los artículos seis y siete en relación con las reglas sobre la reclamación de estas pensiones y de responsabilidad patrimonial, al prever consecuencias jurídicas desiguales para situaciones que no lo son, y comprometer, además, la protección de familia.

Los artículo nueve y diez que regulan la adopción de la pareja estable y la subrogación en los derechos de los cónyuges vulneran el art. 2 LORAFNA en relación con los arts. 32, 39, 149.1.1 y 149.1.8 CE.

El artículo once estaría incurriendo en vicios de forma al no haber sido aprobado por la mayoría absoluta necesaria a tenor del artículo 2 LORAFNA, ya que establece el régimen sucesorio. Ante estas alegaciones de la parte recurrente El Tribunal Constitucional se pronunció de la manera que pasaremos a exponer a continuación.

En cuanto a la apreciación de un vicio *in procedendo*, al no haberse explicitado que la ley había sido aprobada con la mayoría absoluta pertinente, se manifiesta el Tribunal desestimando el motivo ya que considera que se siguieron todos los trámites previstos en la LORAFNA y que se publicó tanto en el Boletín Oficial de Navarra como en el Boletín Oficial del Estado. Recuerda también el Tribunal que no se prevé en el ordenamiento navarro dos tipos de leyes en función de la mayoría necesaria para su aprobación y que, pese a que fuera recomendable señalarlo, al margen de la más o menos acertada técnica legislativa, no puede entenderse la inconstitucionalidad de la ley foral por este motivo.⁵⁹

Seguidamente, el tribunal resuelve sobre el problema de competencia alegado por las partes recurrentes en relación con las formas relativas al matrimonio. El tribunal entiende que no hay lugar a vulneración del artículo 149.1.8 de la Constitución, para ello se escuda en diversas sentencias⁶⁰ en las que ya se ha pronunciado sobre la cuestión de si las parejas de hecho y el matrimonio son realidades iguales, dando a ello una respuesta negativa al considerar que si bien hay ciertos parecidos son suficientemente distintas las figuras como para que no haya una reserva de competencia del estado.⁶¹

Sobre la vulneración a la libertad de no contraer matrimonio que entienden los recurrentes que existe en la mayor parte de la ley, el tribunal rechaza la argumentación

⁵⁹ Fundamento jurídico cuarto.

⁶⁰ SSTC 88/1993, de 12 de marzo; 156/1993, de 6 mayo y 236/2000, de 16 de octubre.

⁶¹ Fundamento jurídico quinto.

dada al no entender que la ley foral de navarra crea una asimilación de la unión de hecho por el matrimonio.⁶²

En cuanto al reproche que realizan los recurrentes sobre el artículo 2.3 de la ley foral al entender que esta vulneraría el artículo 149.1.8 de la Constitución al legislar sobre la aplicación y eficacia de las normas y los conflictos de leyes, aplicando en este caso el ámbito en función de la vecindad civil, el tribunal entiende correcta la interpretación que ha dado la parte recurrente y decide por tanto declarar dicho artículo de la ley foral como inconstitucional y, por tanto, nulo.⁶³

En los fundamentos jurídicos siguientes el tribunal comenzará a analizar si efectivamente el articulado de la norma navarra incurre en las violaciones constitucionales que la parte recurrente alega. Empezará por señalar la inconstitucionalidad de los dos primeros supuestos del artículo 2.2⁶⁴ al entender que en este caso la regulación de la unión de hecho está sujeto a normas imperativas y no dispositivas, cosa que atenta directamente contra el carácter voluntario de la figura e incurriendo, según considera el Tribunal en una vulneración del artículo 10.1 de la Constitución.⁶⁵ Sin embargo, sí que entienden acorde a derecho la posibilidad del pacto entre las partes para la constitución de la pareja, pues en este caso sí que se respetaría la voluntariedad y el carácter dispositivo.

No admitirá el tribunal el reproche que formulan los recurrentes con respecto al artículo tercero de la ley por un posible incurrimento en vulneración del principio de seguridad jurídica, pues entiende que estaría constitucionalmente aceptada la posibilidad de acreditar la pareja de hecho por cualquiera de los medios de prueba aceptados en derecho. Pese a ello, sí que reconoce la inconstitucionalidad del inciso “*y el transcurso de un año de convivencia*” por los mismos motivos señalados más arriba con respecto al artículo segundo.

Al artículo cuatro se le señala la inconstitucionalidad que se da en su cuarto apartado, ya que la imposición legal de que al término de la unión se revoquen los poderes otorgados entre los miembros de la pareja estaría vulnerando de nuevo el artículo 10.1 de

⁶² Fundamento jurídico séptimo.

⁶³ Fundamento jurídico sexto.

⁶⁴ Criterios de temporalidad y descendencia común.

⁶⁵ Se hace necesario señalar en este punto que, si bien el tribunal termina por reprochar la inconstitucionalidad del artículo, no lo hace por los mismos motivos que alegan los recurrentes, ya que estos consideraban que lo que se estaba vulnerando con este artículo el derecho a la intimidad personal y familiar, no el derecho al libre desarrollo de la personalidad como entiende el tribunal.

la Constitución. Entiende el tribunal en este punto que, si de verdad esa fuese la voluntad de las partes podrían llevar a cabo esta revocación por sí mismas sin necesidad de un imperativo legal para ello.

Cargará la sentencia duramente contra el artículo quinto de la ley, ya que terminará por declarar completamente nulos cuatro de sus cinco apartados y uno de manera parcial. Seguirá utilizando el tribunal los mismos motivos que en los artículos anteriores para señalar la inconstitucionalidad de este.

Del apartado primero del artículo se reprocha la irrenunciabilidad de los derechos que la propia ley otorga a los miembros de la pareja, atacando en consecuencia la libertad de elección de los compañeros. En el apartado segundo se estaría limitando la posibilidad de la pareja de establecer los plazos que estimasen oportunos, por lo cual devendría inconstitucional. Del apartado tercero se reprocha la imposición de un sistema de contribución al sostenimiento de la familia en caso de ausencia de pacto, de la misma manera que sucede con la imposición de pensión compensatoria de los apartados cuatro y cinco. Por la estrecha vinculación del artículo sexto a los dos últimos apartados del quinto, también se considera que este estaría incurriendo en vulneración del artículo 10.1 de la Constitución.

Mismos reproches por su imperatividad hace la sentencia a los artículos séptimo y noveno de la ley foral, por lo cual también devendrán nulos.

Mención separada hace la sentencia, en su fundamento jurídico número doce, al artículo octavo de la ley, relativo a la adopción de manera conjunta por los miembros de la pareja. En este punto el problema estriba en que no se menciona la sexualidad de los miembros de la pareja, lo cual abriría la puerta a la posibilidad de adopción de parejas homosexuales. Lo cual, según los recurrentes podría suponer una vulneración del artículo 39.2 de la Constitución. En este punto el tribunal considera que no existe inconstitucionalidad alguna, además de señalar que según el artículo 48 LORAFNA la competencia para legislar sobre la adopción en Navarra recae sobre la propia comunidad autónoma.

Al régimen sucesorio, al régimen fiscal y al régimen de función pública, recogidos por la ley en sus artículos once, doce y trece respectivamente, dedica la sentencia el fundamento jurídico decimotercero. Declarará nulos los artículos once y doce por considerar que sus disposiciones son de carácter imperativo, vulnerando así el artículo

10.1 de la Constitución. Distinta consideración tendrá sin embargo para el artículo decimotercero, ya que considera el tribunal que se encuentra dentro del marco del artículo 49.1. b) LORAFNA.

En el último fundamento jurídico de la sentencia se recogen los alcances temporales de la sentencia. Reconoce el Tribunal que dotar de efectos *ex tunc* las declaraciones de nulidad de la mayoría de los preceptos de la ley podría suponer un grave perjuicio para todas aquellas personas que se encuentren bajo la aplicación de esta. Es por ello que, en pos del principio de seguridad jurídica se dota a la sentencia de efectos *pro futuro*.

No podríamos finalizar el análisis de esta sentencia sin repasar, aunque sea de manera breve, los dos votos particulares que formularon tres de los miembros del tribunal.

El primero de ellos, formulado por el Magistrado Manuel Aragón Reyes, señala que se debería de haber declarado la inconstitucionalidad de todo el articulado de la ley pues esta sería una extralimitación de la competencia de la comunidad autónoma y, por tanto, una vulneración del artículo 149.1.8 de la Constitución. Para esto se apoya en que la equiparación que hace la ley en alguno de sus artículos de las uniones de hecho con el matrimonio supondría una intrusión de la comunidad autónoma en materias que encuentra reservada la competencia el estado. En segundo lugar, considera el magistrado que las uniones de hecho no son una realidad que exista en el derecho foral de navarra, por lo cual no puede considerarse que entre dentro de los presupuestos del artículo 149.1.8 de la Constitución al no tratarse de conservación, modificación o desarrollo del derecho civil.

El segundo de los votos particulares, de escaso valor para la materia que aquí nos ocupa, es el formulado por el Magistrado Juan José González Rivas. En el se pone de manifiesto su discrepancia con la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan adoptar. Además de poner en relieve su discrepancia con la sentencia del mismo Tribunal que reconocía la constitucionalidad del matrimonio homosexual.

6.3 Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 110/2016⁶⁶

La última de las sentencias que declarararía la nulidad parcial de una ley sobre las uniones de hecho sería la sentencia del Tribunal Constitucional 110/2016, que este caso debería fallar al respecto de la constitucionalidad de la ley valenciana.

En este caso el recurso de inconstitucionalidad vendría siendo interpuesto por el abogado del estado en nombre del presidente del gobierno en fecha de 18 de julio de 2013 y yendo dirigido a la totalidad de la ley. Para defender tal recurso, el abogado del estado se apoya en dos criterios para considerar la inconstitucionalidad de la ley, un sería de carácter competencial y el otro de carácter sustantivo.

En cuanto a la parte competencia, alega la parte recurrente que se estaría cometiendo una vulneración del artículo 49.1.2 del estatuto de autonomía de la comunidad valenciana, así como del artículo 149.1.8 de la Constitución española. Esto se debe, a que como ya hemos visto en los reproches realizados en las anteriores sentencias, la competencia para legislar en materia de derecho civil debería ser exclusiva del estado. Considera el recurrente que no podría entenderse el desarrollo de leyes relativas a las uniones de hecho como desarrollo del derecho civil propio de la comunidad autónoma al tratarse las parejas de hecho de un fenómeno de nueva creación.

En cuanto al reproche que la parte recurrente realiza sobre el carácter sustantivo de la ley, se apoya en la jurisprudencia de la STC 93/2013, al considerar que las mismas vulneraciones del artículo 10.1 de la constitución que el tribunal apreció sobre la ley navarra serían de aplicación en este caso.

Como es habitual en la práctica del Tribunal Constitucional a la hora de resolver sobre el carácter competencial y el carácter sustantivo de una norma, se comenzará por el primero, pues de ser estimado no sería necesario entrar a resolver sobre el segundo.

Como señala la sentencia en su fundamento jurídico cuarto, quinto y sexto, seguirá los mismos criterios que ya utilizó en la STC 82/2016, de 20 de abril, por tratarse de un recurso muy parecido entre las mismas partes. Así pues, siguiendo su propia doctrina, el tribunal entiende que será de competencia de la comunidad autónoma la regulación de los efectos civiles de la relación en tanto en cuanto sea posible demostrar la existencia de una costumbre asentada, ya al momento de promulgación de la constitucion, de la figura, o,

⁶⁶ Referencia; **ECLI:ES:TC:2016:110**

por lo menos de una conexa. Cosa que, por supuesto, el Tribunal descarta, pues ya el preámbulo de la ley recurrida hace referencia a la nueva creación de la figura de las uniones de hecho. es por ello que el tribunal termina por entender que todos los preceptos de la ley en los cuales se regulen efectos y contenidos de carácter civil serán una extralimitación de la competencia autonómica, y que, por la vulneración al artículo 149.1.8 de la constitucion que esto supondría, deberán entenderse nulos.

Si bien en el fundamento jurídico sexto, la sentencia alude a la nulidad de buena parte de la ley, en el séptimo señala que esto no supone la nulidad de la totalidad toda la ley, no por lo menos de este motivo, pues existen determinados artículos cuyos contenidos no son de carácter civil.

Así, por tanto, hasta ahora el tribunal ya habría declarado la nulidad de los artículos seis⁶⁷, siete⁶⁸, ocho⁶⁹, nueve⁷⁰, diez⁷¹, once⁷², doce⁷³ y catorce⁷⁴.

Además de estos deberá entenderse derogado también el artículo segundo de la ley, relativo al ámbito de aplicación de la ley, pues se estipulaba el criterio de la vecindad civil para poder aplicar la norma a los miembros de la pareja. Sin embargo, el tribunal considera que la ley debe atenerse al principio de territorialidad de las competencias.

El artículo primero de la ley será considerado parcialmente inconstitucional en cuanto da soporte a los artículos de normativa civil anteriormente mentados. Esto supondría que de la redacción original, que diría lo siguiente:

“1. El objeto de la presente ley es la regulación de los derechos y deberes de quienes son miembros de las uniones de hecho formalizadas, entendiendo por tales las formadas por dos personas que, con independencia de su sexo, convivan en una relación de afectividad análoga a la conyugal, y que cumplan los requisitos de inscripción del artículo 3 de esta ley.

⁶⁷ Relativo a los efectos de la extinción de la pareja.

⁶⁸ Libertad de regulación.

⁶⁹ Gastos comunes.

⁷⁰ Derecho de alimentos.

⁷¹ Disposición de la vivienda.

⁷² Responsabilidad patrimonial.

⁷³ Ajuar doméstico y uso de la vivienda.

⁷⁴ Derechos sucesorios.

2. *Nadie podrá ser objeto de discriminación por razón de la naturaleza, matrimonial o no, del grupo familiar del que forme parte.*”

Deberá eliminarse la expresión “deberes y derechos de quienes son miembros”, el resto del artículo podrá seguir existiendo.

En cuanto a los artículos cuatro y cinco no se aprecia que exista ninguna extralimitación por parte del legislador autonómico, ya que como el tribunal señala se estarían regulando aspectos neutros sin consideraciones civiles.

El fundamento jurídico octavo, está dirigido al análisis del artículo quince la ley, relativo al régimen de función pública, que la parte recurrente achacó una violación del artículo 149.1.18 de la constitucion, el tribunal resuelve de manera idéntica que en las dos sentencias ya vistas, y, por tanto, no estima la inconstitucionalidad de estos preceptos. Tampoco entiende la vulneración del artículo 10.1 de la constitucion, pues si bien considera que hay una cierta imperatividad, su aplicación quedaría subordinada a una solicitud por parte de uno de los miembros de la pareja, por lo cual no habría una violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En el último fundamento jurídico de la sentencia se recogen los alcances temporales de la sentencia. Reconoce el Tribunal que dotar de efectos *ex tunc* las declaraciones de nulidad de la mayoría de los preceptos de la ley podría suponer un grave perjuicio para todas aquellas personas que se encuentren bajo la aplicación de esta. Es por ello que, en pos del principio de seguridad jurídica se dota a la sentencia de efectos *pro futuro*.

Finalmente debemos hablar del voto particular realizado por el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos estaría enfocado en entender que la ley no estaría contraviniendo el artículo 149.1.8 de la constitucion al poder fundar está en derechos históricos de la comunidad valencia, pese a que estos no se encontrasen vigentes aunque estos no se encontrarse vigentes a la hora de la promulgación de la constitucion en 1978, aunque ellos si que hubiesen estado reconocidos por el tribunal constitucional cuando se consagran en un estatuto de autonomía.

A la vista de los análisis de las normas autonómicas y de las sentencias que han declarado la nulidad parcial de alguna de ellas, podemos sacar una conclusión importante. Si sometiésemos al filtro del Tribunal Constitución a la mayoría de las leyes de parejas de hecho vigentes a día de hoy se debería de declarar su nulidad en la mayor parte de su

contenido. Esta no es una cuestión baladí, ya que supone que la mayor parte de la regulación de la figura es potencialmente contraria a la constitución, aunque aún no se ha declarado esta. Esto es algo que el legislador nacional debería tener en cuenta a la hora de plantearse la posibilidad de desarrollar una ley que regule la institución en todo el estado, y así cubrir la brecha existente en nuestro ordenamiento jurídico que ha tratado de ser solucionada, en mayor o menor medida por el legislador autonómico.

7. CONCLUSIONES

Una vez ha sido expuesta la situación en la que se encuentran las parejas de hecho en nuestro país de un modo general llega el momento de hacer las consideraciones finales en torno a esta figura a la luz que nos ha arrojado este estudio. Puesto que a lo largo de todas las páginas que han conformado este trabajo se ha pasado, aunque sea de manera referencial, por tantos temas distintos, trataremos aquí de hacer una recapitulación conclusiva de las ideas vertidas.

I

Las uniones de hecho: ¿Qué son?

Para no ser redundantes, y como en este punto tan solo queremos solventar las cuestiones que hemos visto, de manera dilatada en este trabajo, no daremos una respuesta técnico-jurídica, sino que contestaremos a la pregunta de la manera más clara posible: la unión de hecho no es ni más ni menos que la relación de dos personas que, estando en pareja, no se han casado. Esto puede deberse a los más diversos motivos, los cuales ni siquiera están revestidos de una especial importancia. Puede ser porque aún no han considerado la idea, y la pareja de hecho sea un paso previo al matrimonio, puede ser que, sí que hayan considerado la idea y que, precisamente, no quieran hacerlo y que sea una huida del derecho. Da igual, porque lo que importa es que existe. La unión de hecho es una situación, que, sin formalismos, existe de hecho, de facto.

II

Una situación de hecho, no de derecho.

El matrimonio es una manera de formalizar una relación, que encuentra todos sus aspectos completamente regularizados desde su nacimiento hasta su muerte. El matrimonio no surge de manera espontánea, hay que buscarle, hay que llevarle a cabo. Las parejas de hecho, sin embargo, son una *rara avis* en el derecho, porque nacen de manera informal y su propia existencia se basa en la misma idea de no estar regularizadas. Pero esto es algo que solo tiene cabida en el mundo de las ideas. Nada puede escapar del derecho, porque cualquier cosa que existe en la realidad genera consecuencias, las cuales en algún momento terminarán por crear conflictos que deberán ser solucionados. Es por ello por lo que se hace necesaria una regularización para ello. Pero ¿no desvirtuaría esto la propia figura? En nuestra opinión, sí y no. En el mismo momento que entramos a

normativizar algo cuyo propósito es concretamente el de no estar normativizado hemos hecho que deje de existir. Lo que sucede en el derecho español, por tanto, es que resulta impropio hablar de la existencia de las uniones o parejas de hecho, ya que estas, en la práctica jurídica, no existen, por el contrario, se ha creado una suerte de matrimonio bastardizado, pues se encuentra totalmente alejado de su idea primigenia. Es por ello que, desde esta parte consideramos errado en sí mismo su nombre. No podemos considerar que se trata de una situación de hecho cuando en buena parte de nuestro país es necesario seguir la formalidad de inscribirse en un registro. Pese a que a lo largo de este trabajo hemos utilizado por lo general la expresión unión de hecho y ocasionalmente sus derivados, esto se ha hecho con el fin de simplificar la tarea de hacernos entender. Concluimos, por tanto, que sería más apropiado, aunque no sea más que una quimera por lo asentada que está ya determinada nomenclatura, el referirnos a la institución por los rasgos que realmente sí lo caractericen, como por ejemplo convivencia *more uxorio*.

III

Dispersión normativa y constitucionalidad

Al margen de discusiones sobre el lenguaje que poca importancia tienen en la realidad sobre la situación en la que se encuentran miles de españoles hay un problema mucho mayor. Este no es otro que el más que evidenciado problema de dispersión normativa y subsiguiente inseguridad jurídica que se genera. Ante la relajación, o más bien desidia, de un legislador nacional que por regla general ha obviado a las uniones de hecho ha tenido que ser el legislador autonómico el que ha recogido el relevo de la normativización. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, no ha habido una igualdad de criterio a la hora de decidir qué es, y qué no, una unión de hecho o lo que supone el serlo. Esto nos lleva a sinsentidos tales como que lo que en un lugar sea una pareja de hecho perfectamente constituida y protegida a unos pocos kilómetros sea completamente insignificante para el derecho. Esto ha generado, genera y presumiblemente seguirá generando, pues no parece que haya intención de cambiar absolutamente nada, una ridículamente enorme inseguridad jurídica.

Por otro lado, existe el problema de la potencial inconstitucionalidad de la mayoría de las leyes. El descuido del legislador nacional ha llevado al autonómico al poco agradecido camino de la intrusión competencial. Las autonomías se han visto en la tesitura de tener que regular materias para las que no se encuentran capacitadas, y que,

aunque esto haya sido de manera más que consentida, ha llevado al Tribunal Constitucional a vaciar de contenido leyes de uniones de hecho hasta en tres ocasiones.

IV

¿Ante tal situación que se puede hacer?

A la vista de tal inaceptable situación en un estado de derecho y ante la innegable realidad de que este tipo de uniones cada vez son más populares en nuestra sociedad solo quedaría la solución, y a riesgo de pecar de ingenuidad, de que el legislador nacional dejase a un lado su indolencia y que, con sentido de estado, regulase de una vez por todas la institución de manera satisfactoria y constitucional, pues la creación de la familia, que es el núcleo duro de las sociedades, no es una cuestión baladí que deba dejarse a la improvisación. Sin embargo, no parece que esto es algo que vaya a suceder en un futuro cercano.

Basta con decir, como diría el célebre escritor italiano Enio Flaiano al ser preguntado en una ocasión por la situación política de su país: *“La situazione è grave ma non è seria”*

BIBLIOGRAFÍA

- ALBADALEJO GARCÍA, Manuel. Curso de derecho civil. IV. Derecho de Familia. Edisofer. Madrid, 2013.
- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo. Manual de Derecho Civil. Derecho de Familia. Bercal. Madrid, 2018.
- BERNARD MAINAR, Rafael. Uniones o matrimonios de hecho: nuevos intentos legislativos. En proyecto social: revista de relaciones laborales, nº6, 1998.
- ENTRENA KLETT, Carlos María. *Matrimonio, separación y divorcio en la Legislación actual y en la Historia*. Aranzadi. Pamplona, 1982.
- ESCRICHE, Joaquín. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Madrid, 1847.
- GARCÍA-HERVAS, María Dolores. *Panorámica legislativa sobre las uniones de hecho*. *Ius Canonicum*, XLI, número 81.
- LACRUZ BERDEJO, José Luis. Elementos de derecho civil IV, Barcelona, 1997.
- LACRUZ BERDEJO, José Luis: elementos de derecho civil, IV. Derecho de Familia. 1997. Barcelona.
- Las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio. Partida IV, Título XIV, Ley II.
- LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. Principios del derecho civil. Tomo IV. Derecho de Familia. Marcial Pons. 2015.
- LÓPEZ-MUÑIZ GOÑI, Miguel. Las uniones paramatrimoniales ante los procesos de familia. Guía práctica y jurisprudencia. 2º Edición, Colex, 1997.
- Loren J. SAMONS, Charles W. FORNARA. *Athens from Cleisthenes to Pericles*. 1991.
- MESA MARRERO, Carolina. Aproximación histórica, terminológica y conceptual. Las uniones de hecho. análisis de las relaciones económicas y sus efectos. Aranzadi, Navarra, 1999.
- MESA MARRERO, Carolina. Las uniones de hecho. Análisis de las relaciones económicas y sus efectos. Aranzadi. Navarra, 1999.
- O'CALLAGHAN MUÑOZ, Xabier. Compendio de derecho civil. Derecho de familia. Editorial revista de derecho privado. Madrid, 1988.
- VILLA GUARDIOLA, Vera Judith., & HURTADO PEÑA, Arturo. (2018). Las uniones de hecho o concubinatos en la historia mundial. *Advocatus*, 15(30).

WEBGRAFÍA

- <http://hj.tribunalconstitucional.es/> (consultado por última vez el 10/12/2020)
- <http://www.boe.es/> (consultado por última vez el 10/12/2020)
- <http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51484#Df.Primer>a (consultado por última vez el 29/11/2020)
- <http://www.poderjudicial.es/> (consultado por última vez el 09/12/2020)
- <http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp> (consultado por última vez el 09/12/2020)
- <https://administracion.gob.es/> (consultado por última vez el 09/12/2020)
- <https://dialnet.unirioja.es/> (consultado por última vez el 15/11/2020)
- <https://dle.rae.es/> (consultado por última vez el 16/12/2020)
- <https://noticias.juridicas.com/> (consultado por última vez el 09/12/2020)
- <https://visa-americana.com/> (consultado por última vez el 12/12/2020)
- <https://vlex.es/> (consultado por última vez el 07/12/2020)
- <https://www.ceuta.es/ceuta/la-institucion/normativa/46-paginas/paginas/normativa/110-reglamento-regulador-del-registro-de-uniones-de-hecho-de-11-de-septiembre-de-1998> (consultado por última vez el 05/11/2020)
- <https://www.iberley.es/> (consultado por última vez el 07/12/2020)
- <https://www.juntadeandalucia.es/> (consultado por última vez el 29/11/2020)
- <https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/vari>os/anulada-parcialmente-la-ley-de-uniones-de-hecho-valenciana/ (consultado por última vez el 16/12/2020)
- <https://www.senado.es/> (consultado por última vez 09/12/2020)
- <https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/enlaces/1201782392856/Tramite> (consultado por última vez el 28/11/2020)
- <https://www.tribunalconstitucional.es/> (consultado por última vez el 10/12/2020)

NORMATIVA CONSULTADA

- Decreto núm. 4104/1964, de 24 de diciembre 1964, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
- Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la compilación del derecho civil foral de navarra
- Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. 176
- - Ley 30/1981, 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.
- Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus».
- - Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil en materia de adopción.
- Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que aprueba el texto del Código Civil.
- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
- Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja
- Reglamento del Registro Uniones de hecho de Ceuta, de 11 de septiembre de 1998.
- Ley Foral Navarra 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables.
- Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de Parejas de Hecho de Castilla-La Mancha.
- Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho en la Comunidad de Madrid.
- Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables de la Comunidad Autónoma de Illes Balears.
- Decreto 61/2002, de 23 de abril que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2001 de la Generalitat Valenciana, por la que se regulan las uniones de hecho.
- Ley de Principado de Asturias 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables.
- Decreto 117/2002, de 24 de octubre, por el que se crea el Registro de Uniones de Hecho en Castilla y León.

- Ley 5/2002, de 16 de diciembre de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de País Vasco.
- Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados.
- Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
- Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
- Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia.
- Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.
- Decreto 30/2010, de 14 de mayo, por el que se crea el Registro de Parejas de Hecho de La Rioja.
- Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña.
- Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas.
- Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
- Ley 5/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana.
- Ley 7/2014, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para 2015 para la Comunidad Autónoma de la Rioja.
- LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal. - Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.
- Ley 7/2018, de 3 de julio, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra

JURISPRUDENCIA CONSULTADA

- Sentencia Tribunal Constitucional 93/2013, de 23 de abril de 2013. ECLI:ES:TC:2013:93
- Sentencia Tribunal Constitucional 184/1990, de 15 de noviembre. ECLI: ES:TC:1990:184
- Sentencia Tribunal Constitucional 81/2013, de 11 de abril ECLI:ES:TC:2013:81
- Sentencia Tribunal Constitucional 88/1993, de 12 de marzo. ECLI:ES:TC:1993:88
- Sentencia tribunal constitucional 156/1993, de 6 de mayo ECLI:TC:1993:156
- Sentencia Tribunal Constitucional, de 16 de octubre. ECLI:ES:2000:236
- Sentencia Tribunal Constitucional 110/2016, de 9 de junio. ECLI:ES:2016:110
- Auto del Tribunal Constitucional 788/1987 de 24 de junio. ECLI:ES:TC:1987:788^a
- Sentencia Del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1994. ECLI: ES:TS:1994:4133
- Sentencia Del Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 2005 ECLI: ES:TS:2005:5270
- Sentencia del Tribunal Supremo 18 de mayo de 1992.. ECLI: ES:TS:1992:3961
- Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1993. ECLI: ES:TS:1993:5604
- Sentencia De Audiencia Provincial De Valencia De 19 De octubre De 2002. Aranzadi: Jur 2003/29459